



UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS FORENSES

No. 16 – Año 10 - Noviembre 2021 - Abril 2022



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Universidad Metropolitana
de Educación, Ciencia y Tecnología
UMECIT**

CATHEDRA

**No. 16 – Año 10
Noviembre 2021 – Abril 2022**

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

MISIÓN

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

VISIÓN

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: www.umecit.edu.pa

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: cathedra@umecit.edu.pa

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. José Alberto Nieto Rojas
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa

Dra. Magdy De las Salas
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Mauricio Sierra
Director Académico

Dra. Merlyng Flores
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro
Secretaria General

REVISTA CATHEDRA

EQUIPO EDITORIAL

EDITOR:

Mgter. Gino Osellame
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT
ginosellame@yahoo.com

COEDITORES:

Dra. Magdy De las Salas Barroso
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

Dr. Juan David Nieto Rueda
Relaciones Internacionales UMECIT
jdnieto@diazcastillo.com

COMITÉ EDITORIAL:

Dra. Ana Emérita de Villalaz
Profesora emérita de la Universidad de Panamá
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

ÍNDICE

Gino Osellame

Presentación de la edición.....	6
----------------------------------------	----------

José Alberto Nieto Rojas

Editorial.....	9
-----------------------	----------

Artículos de investigación:

Cintia Linares Ruiz, Panamá

Aporte de las diversas disciplinas de la geomática al área forense.....	11
--------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ensayos

Gisel Alejandra Olmedo, Panamá

La nota marginal de advertencia, su naturaleza y efectos jurídicos.....	30
--------------------------------------------------------------------------------	-----------

William Yeffer Vivas Lloreda, Colombia

La consulta previa como derecho fundamental de titularidad colectiva de los pueblos indígenas, afros, ron y tribales y su ineffectividad en la protección de los territorios protegidos.....	39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Carlos A. Sánchez V., Panamá

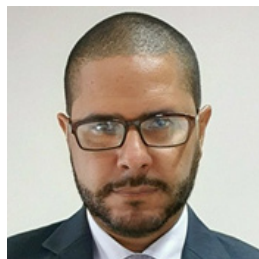
La tentativa de homicidio y su dificultad de aplicación en el proceso penal panameño...	60
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Julián Camilo Forero Agudelo, Colombia

Análisis socio jurídico conceptual de la reparación de víctimas del conflicto armado, vista desde el acuerdo de paz con las FARC EP.....	70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Normas de publicación de la Revista.....	81
-------------------------------------------------	-----------

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN



Gino Osellame R.

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Panamá

Abogado y docente universitario

Editor de la Revista Cathedra

<https://orcid.org/0000-0001-5925-5479>

ginoosellame@yahoo.com

*”Hablo, pero no puedo afirmar nada; buscaré siempre,
dudaré con frecuencia y desconfiaré de mí mismo”.*

Marco Tulio Cicerón (106 a. C.- 43 a. C.)

LA PANDEMIA Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Ya son dieciséis el número de ediciones de nuestra revista jurídica y de ciencias forenses, Cathedra. Cada publicación periódica reitera el esfuerzo de quienes participan en sus ediciones, y el interés personal que tienen todos los autores, no en el hecho técnico de ser leídos o ser citados, sino el de servir de instrumentos para la profundización del conocimiento.

Nuestra revista, ha amasado a lo largo de todas sus publicaciones, una enorme aceptación, en el foro nacional e internacional. Esto basado en el hecho de que hemos gozado de una amplia participación de autores latinoamericanos, que han llevado y replicado nuestros contenidos a lo largo de esta región. Nuestros autores nacionales, así como colombianos, chilenos, peruanos, venezolanos han contribuido, al desarrollo y complemento de nuestras ciencias jurídicas.

La diversidad de nuestros contenidos, es producto de la participación de juristas dedicados al derecho privado y al derecho público. Jueces, fiscales y abogados litigantes han tenido la oportunidad de cruzar criterios en nuestras páginas.

Especialistas de variadas ramas del Derecho, y egresados de esta Casa de Estudios, han tenido oportunidad de plasmar en sus líneas, reflexiones y luces, ora sin fronteras. Y, es que la virtualidad, ha extendido su reconocimiento, lectura y consulta a nivel global.

Luego de su indexación, y sin ánimo de plantear argumentos fatuos, Cathedra, en nuestro foro, es la única revista jurídica sostenida a lo largo de los años, y que integra a las ciencias forenses.

En virtud de lo anterior, hemos tenido la participación de especialistas en ciencias forenses, médicos, odontólogos, patólogos, psiquiatras, psicólogos, y otros peritos, que han experimentado la oportunidad de transmitir su conocimientos, a través de esta reconocida revista científico-jurídica.

Con esta reflexión, presento formalmente en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la Edición 16 de la Revista Cathedra, correspondiente a los meses de noviembre 2021 abril 2022.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, como máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores, en la cual manifiesta su complacencia por esta edición y la continuidad de nuestra revista, como un medio de divulgación y aporte a la academia en el campo de las ciencias forenses y el derecho.

Inicia este número con el artículo de investigación de la magister Cintia M. Linares Ruíz, especialista en criminalística, nos brinda el tema **APORTE DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE LA GEOMÁTICA AL ÁREA FORENSE**, para brindar a la comunidad jurídica y científica, una contribución de su conocimiento y experiencia. En materia de ciencias forenses, tenemos la oportunidad de conocer, como la geomática, es decir, las técnicas y metodologías de adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación y distribución de información geográficamente referenciada, al seguimiento de hechos delictivos, seguimiento y construcción del iter criminis, y la definición de una conducta típica, para la que ayude a la defensa de la teoría del caso.

Seguidamente tenemos los ensayos teóricos presentados por respetados juristas y especialistas en el área del derecho y ciencias forenses. Plumas panameñas y colombianas hacen parte de este número.

La abogada y especialista en Derecho Registral, Licenciada Gisel Alejandra Olmedo, aporta a esta edición, el tema **LA NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA, SU NATURALEZA Y EFECTOS JURÍDICOS**, en el que analiza, además de la importancia del Registro Público, como coadyuvante de las relaciones jurídicas, entre particulares, el hecho de que las notas marginales de advertencia constituyen una declaración jurada, donde se deja constancia de un error u omisión que no puede corregir por sí mismo.

De forma seguida, Doctor William Yeffer Vivas Lloreda, desde la hermana República de Colombia, nos presenta un tema poco tratado en nuestro país, que consiste en la consulta previa, como

derecho fundamental. El título **LA CONSULTA PREVIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE TITULARIDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROS, RON Y TRIBALES Y SU INEFECTIVIDAD EN LA PROTECCION DE LOS TERRITORIOS PROTEGIDOS**, deja claro que el Estado, tiene la responsabilidad de adoptar normas que faciliten y fortalezcan la defensa de los derechos humanos, y la defensa de las colectividades étnicas, que como minorías en nuestra región, se ven afectada por la acción u omisión del sistema de gobierno.

En materia penal, el autor Carlos A. Sánchez V., aporta el ensayo intitulado **LA TENTATIVA DE HOMICIDIO Y SU DIFICULTAD DE APLICACIÓN EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO**, nos expone la dificultad que encuentra el sistema penal panameño, para poder procesar sujetos que han cometido delitos, en grado de tentativa, y la coyuntura sobre la no consumación de la actividad criminal. De más, lectura de interesante contenido para debatir.

En esta publicación contamos con la participación de otro jurista colombiano, el Dr. Julián Camilo Forero Agudelo, quien acerca a nuestro foro, una coyuntura jurídico social, que es derivada de los acuerdos de paz, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, como lo es, la definición de víctima, responsabilidad, conflicto, y otros conceptos que ahora, toman forma legal, los cuales, podemos evidenciar, en el tema titulado **ANÁLISIS SOCIO JURÍDICO CONCEPTUAL DE LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, VISTA DESDE EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EP**.

Que disfruten esta interesante edición.

EDITORIAL



José Alberto Nieto

Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia
y Tecnología, Panamá
rectoria@umecit.edu.pa

DOI: 10.37594/cathedra.n16.545

EL DERECHO Y LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Para esta edición de la revista *Cathedra*, nos enorgullece presentar este número que presenta varios artículos de importancia, no sólo para el sector jurídico sino de actualidad, en el contexto nacional e internacional.

El ciberespacio ha modificado conceptos del derecho con respecto a lo habitual, cambiando la soberanía de los estados, el pensamiento de sus gobernantes y la normatividad que rige las relaciones con la sociedad y la sociedad de la información, convirtiéndose cada vez más en un mundo interconectado, con ayuda del internet de las cosas, la inteligencia artificial, machine learning, blockchain, robótica, cloud computing, entre otras variantes de las tecnologías de la información y la nueva tendencia del metaverso.

Este espacio digital se presenta como un segmento sin regulación, brindando una oportunidad para que el derecho se modernice y vaya a la vanguardia con las tecnologías de la información, coadyuvando a los Estados y a las demás disciplinas en la regulación de muchos vacíos normativos y de los nuevos desafíos de la actualidad, a través de tratados y convenios internacionales, para facilitar la cooperación y combatir los nuevos delitos.

Debemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar al mundo digital, acorde con la industria 4.0 y actualizar a los profesionales del derecho con nuevos y dinámicos conocimientos acorde a las nuevas tendencias mundiales. En un mundo tan cambiante, es donde el derecho y la educación, entran a dinamizar estos grandes retos en el ciberespacio.

En el año 2021 se aceleró la transformación digital de las personas jurídicas y naturales con migración a la nube, donde se esperan más y mejores desarrollos acordes con la era digital, siempre teniendo en cuenta la ciberseguridad y la transmisión de datos, donde la tendencia es invertir más en la seguridad técnica que en la personal, violentando en algunos casos la privacidad de las personas.

Para el año 2022 el desafío seguirá siendo la seguridad de la información.

Para finalizar, debemos recordar que aún al día de hoy, estamos en pandemia y con más variantes que generan mucha expectativa a la humanidad, no sabemos que nos deparará el futuro porque es incierto, pareciera que estuviéramos en una película de ciencia ficción pero la verdad es que es una realidad, a la cual debemos enfrentarnos y superar de la mano de la tecnología, sin descuidar nuestra salud física y mental.

Disfruten de esta edición de Cathedra, con aportes de plumas nacionales e internacionales. Desde la alta gerencia de UMECIT, continuaremos fortaleciendo estos espacios de divulgación y reflexión durante el 2022 y venideros.

APORTE DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE LA GEOMÁTICA AL ÁREA FORENSE



Cintia M. Linares Ruiz*
Universidad UMECIT, Panamá
<https://orcid.org/0000-0001-7291-9241>
cimaglir18@gmail.com

DOI: 10.37594/cathedra.n16.546

Fecha de recepción: 02/09/2021

Fecha de revisión: 25/09/2021

Fecha de aceptación: 21/10/2021

RESUMEN

Siendo la geomática un término que surge por vez primera en 1969, por el francés Dubuisson, las definiciones que se le dan en la actualidad mantienen esa esencia inicial, siendo una de estas según la Real Academia de las Ciencias: *“ciencia y tecnología de la captura, análisis, interpretación, distribución y uso de datos geoespaciales”*. *“Campo de actividades que, usando una aproximación sistémica, integra todos los medios para adquirir y procesar datos espaciales requeridos como parte de actividades científicas, administrativas, legales y técnicas que se preocupan de la producción y gestión de información espacial”*. Esta disciplina en los últimos años ha sido desarrollada en gran medida en diversas áreas, la incorporación del uso de GPS (sistema de posicionamiento global), perteneciente a Estados Unidos y que luego de surgir para uso exclusivo en el ámbito militar y de seguridad, abrió sus puertas al uso público, trayendo con esto un abanico de múltiples utilidades. De igual forma el resto de las ramas de la geomática como lo son la topografía, cartografía, la teledetección y la fotogrametría, resultan igualmente interesantes para el desarrollo de múltiples actividades en el área forense. De ahí que en diversos países y en atención al carácter científico que deben tener las diferentes áreas utilizadas en la criminalística y las ciencias forenses, se han venido incorporando las diversas ramas de la geomática como la topografía para la obtención de datos en campo para diferentes delitos y diligencias, desde la inspección ocular inicial en el sitio donde se da un hecho, verificación de datos en casos relacionados con temas de litigio de terrenos o la fijación mediante métodos como el uso de poligonales para establecer áreas afectadas en un caso contra el ambiente. Igualmente, la fotogrametría, la cual entendida *“De una manera más formal la podemos considerar como la disciplina que lleva a cabo medidas indirectas de*

* Mgter en Criminalística, Especialista en Criminalística y Docencia Superior, Perito Forense Certificada del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

objetos utilizando perspectivas fotográficas. Dicho de otro modo, el objetivo de la fotogrametría es conseguir información tridimensional de objetos a partir de medidas efectuadas en fotografías”¹, también ha venido a incorporarse a esa gama de herramientas interesantes utilizadas para generar datos que luego son presentados para sustentar y servir como evidencias demostrativas ilustrativas, ya que desde el advenimiento con la Fotogrametría Digital en la década de los 90, uno de los rasgos más notables de esta línea es su creciente popularización y socialización; esto es, la posibilidad de desarrollar líneas de bajo costo al alcance de cualquier tipo de usuario. Actualmente, una de estas posibilidades pasa por el empleo de plataformas aéreas no tripuladas (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs), conocidas popularmente como “drones”, con las que obtener imágenes aéreas que permitan la derivación de productos cartográficos cuyas aplicaciones se extienden a diferentes campos de trabajo. La incorporación de todas estas formas existentes dentro de las gamas que ofrece la geomática no han escapado a nuestro país, donde en los últimos años se ha utilizado herramientas relacionadas a esta disciplina en el ámbito de la topografía y la ilustración mediante el uso de datos georreferenciados, así como la incursión en el uso de plataforma aéreas no tripuladas más recientemente.

Palabras clave: geomática, topografía, georreferenciación, fotogrametría, forense.

CONTRIBUTION OF THE VARIOUS DISCIPLINES OF GEOMATICS TO THE FORENSIC AREA

ABSTRACT

Being the geomatics a term that arises for the first time in 1969, by the French Dubuisson, the definitions that are given to him at present maintain that initial essence, being one of them, according to the Royal Academy of The Language: *“science and technology of the capture, analysis, interpretation, distribution and use of geospatial data “*, *“Field of activities that, using a systemic approach, integrates all the means to acquire and process spatial data required as part of scientific, administrative, legal and technical activities that are concerned with the production and management of spatial information”*, This discipline in recent years has been developed to a large extent in various areas, the incorporation of the use of GPS (global positioning system), belonging to the United States and that after arising for exclusive use in the military and security field, opened its doors to public use, bringing with it a range of multiple utilities. Similarly, the rest of the

¹ Rodríguez, Joan, et al. Fotogrametría arquitectónica, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioumecitsp/detail.action?docID=3229703>.
Created from biblioumecitsp on 2018-09-02 19:43:29.

branches of geomatics, such as topography, cartography, remote sensing and photogrammetry, are equally interesting for the development of multiple activities in the forensic area. In various countries and in view of the scientific nature of the different areas used in criminalistics and forensic sciences, the various branches of geomatics have been incorporated, such as topography to obtain data in the field for different crimes and proceedings, from the initial ocular inspection in the place where an event occurs, verification of data in cases related to land litigation issues or fixation by methods such as the use of polygonal to establish affected areas in a case against the environment. Photogrammetry has also come to be incorporated into this range of interesting tools used to generate data that are then presented to support and serve as illustrative demonstrative evidence, since the advent of Digital Photogrammetry in the 90s, one of the features most notable of this line is its growing popularization and socialization; that is, the possibility of developing low cost lines available to any type of user. Currently, one of these possibilities is the use of unmanned Aerial Vehicles (UAVs), popularly known as “drones”, with low cost to obtain aerial images that allow the derivation of cartographic products whose applications extend to different fields of work. The incorporation of all these existing forms within the ranges offered by geomatics have not escaped our country, where in recent years’ tools related to this discipline have been used in the field of topography and illustration through the use of georeferenced data, as well as the incursion in the use of unmanned aerial platform more recently.

Keywords: geomatic, topography, georeferencing, photogrammetry, forensic.

INTRODUCCIÓN

Inicialmente se plantearán conceptos relacionados a la geomática, ramas y disciplinas que la componen, campos de aplicación en los que ha sido utilizada desde sus inicios y los resultados obtenidos en algunas de estos. Aunado a lo anterior y en base a artículos y trabajos desarrollados por expertos en ramas principalmente de la ingeniería, se hará mención de algunos estudios realizados por los mismos presentados a través de trabajos de gran interés, así como la forma en que en la actualidad, algunos países los utilizan e igualmente el uso de algunos elementos derivados de esta disciplina, los cuales han sido discutidos y presentados por medio de investigaciones y casos concretos e incluso se han realizado observaciones y aportes de carácter legal con referencia a estos.

Es importante indicar que siendo la geomática la ciencia encargada de integrar los medios de captura, procesamiento y análisis de la data georreferenciada y como tal puede ser usada en diferentes aplicaciones, todas ellas útiles para el desarrollo de los países, no se ha quedado fuera

de la realidad forense y las investigaciones de diversos delitos, por lo que se presentaran aspectos en que de diferentes formas se ha incorporado como pruebas de gran valía, algunas de las ramas de esta ciencia, tal es el caso del uso de GPS en la ubicación de personas, el uso de la fotogrametría para ilustración y animación en casos forenses, la topografía en casos relacionados con litigios y disputas legales de terrenos, que son presentadas ante la autoridad competente, así como la aplicación de métodos e instrumentos tan populares en la actualidad como los conocidos “drones”.

DESARROLLO

Durante los últimos años y con mayor agudeza a raíz de la pandemia, surgida en el continente asiático a finales del 2019, los medios tecnológicos se han convertido en una necesidad en todos los ámbitos de nuestra vida, pasando de ser una novedad, un lujo o un objeto de uso exclusivo para la nueva generación a ser un aspecto cotidiano en la vida de todos indistintamente del género, la edad o el extracto social. En consecuencia, también se ha convertido en un instrumento de interés dentro del desarrollo de múltiples disciplinas forenses.

En este sentido, los aspectos a abordar dentro de la problemática a presentar son dentro de esa amplia gama de temas tecnológicos los relacionados a la geomática que es aquella que comprende la ciencia, ingeniería y arte que se emplea en la colecta y manejo de información geográficamente referenciada. La geomática a su vez encierra una serie de disciplinas como lo son la geodesia, cartografía, fotogrametría y topografía, de las cuales se puede valer la criminalística para apoyar en la presentación de ciertos elementos de carácter demostrativo ilustrativo específicamente en el caso que nos ocupa mediante el uso de algunas disciplinas en casos judiciales como lo son la ubicación de personas mediante la geolocalización, la animación 3D en casos contra la vida principalmente, entre otras aplicaciones.

Al referirnos en líneas anteriores al concepto “demostrativo ilustrativo”, nos referimos a la presentación visual de algunos elementos que pueden contribuir a entender mejor una información que de manera escrita o narrada, en el ámbito judicial e investigativo puede no ser claramente entendido. Así, el gran incremento en el uso de los teléfonos celulares, los cuales brindan información permanente de nuestra ubicación, así como otro tipo de actividades que realizamos se ha convertido desde hace muchos años en una gran herramienta que aporta a la justicia.

Desde algunas décadas atrás la ubicación de personas a través de instrumentos que cuenta con información de su localización se han utilizado como pieza fundamental en el desarrollo de investigaciones de tipo penal, dándose a conocer por José Antonio González, en su artículo denominado “*Los Verdaderos Móviles Del Crimen*”, algunos aspectos interesantes dentro de una

investigación realizada en España en la cual la información obtenida desde un teléfono celular, jugó un papel importante, tal como se señala en las siguientes líneas:

“La geolocalización es clave para situar a un sospechoso en la escena del crimen o reconstruir sus pasos con la señal GPS. Así sucedió también con el caso Bretón. En 2012 asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, su coartada es que los raptaron en el parque de la Cruz Conde de Córdoba.

Sin embargo, José Bretón se olvidó de la localización de su dispositivo móvil. A pesar de apagarlo para que la policía no pudiera rastrearle, desde el terminal se realizaron varias llamadas que permitieron descubrir todos los pasos aquel 8 de octubre de 2012.”

Por otro lado, otra de las disciplinas que engloba la geomática es la fotogrametría, la cual se torna muy innovadora y eficiente en muchos aspectos de la investigación, ya que podemos obtener información visual de forma aérea a través de diversas formas, pero en este caso específico haremos referencia al “dron”, así como a las vistas fotográficas o registros terrestres que pueden darse también mediante instrumentos más modernos y costosos como lo son los escáneres láser. Uno de los grandes retos a desarrollar en este sentido se encuentra en ampliar el conocimiento y crear los mecanismos que, basados inicialmente en conocimientos básicos e intermedios de la geomática, en algunas de sus ramas, pueda servir como herramienta eficaz y aportar información de relevancia en las investigaciones de casos a investigar que lo ameriten.

El problema a resolver es conocer de forma más amplia en qué consiste la geomática y cómo puede utilizarse en el área forense en nuestro país, sin perder su esencia y adaptada a la necesidad particular en el ámbito de la criminalística que colabora como brazo auxiliar de la justicia en el esclarecimiento de casos delictivos de diversa índole. Es importante tomar en cuenta que existen profesionales dedicados al estudio de la geomática y geodesia, cuyo campo de estudio ha incursionado en los últimos años en nuestro país y que abarca una gama amplia y detallada de estos, pero que igualmente se requiere el conocimiento y aspectos propios del experto criminalista, quien tendrá otro enfoque y otros matices en la utilización de estos conocimientos, para los que requerirá una preparación más técnica, aplicada a los resultados que se desean obtener y que sean de utilidad, para brindar datos de interés en diversas investigaciones judiciales, para lo cual desarrollaré de forma sencilla información básica sobre la geomática y las formas en que puede aplicarse a la criminalística según experiencias en otros países y los primeros pasos de incursión en esta disciplina dentro de nuestro istmo panameño.

En busca de referentes a la temática expuesta y tomando como referencia, que en la actualidad se han tenido cada vez con mayor frecuencia casos en que por medio de la geolocalización en

sus diversas formas se han logrado grandes aportes presentados en corte, tanto para corroborar información de la ubicación de una persona u objeto en fecha, hora y lugar determinado, como para desvirtuar la misma. Lo anterior, debido a la forma en que ha ido en aumento el uso de diversos métodos de obtención de datos, sobre todo a través de información generada por coordenadas provenientes de satélites, así como otro tipo de información que de ellos se puede obtener, principalmente mediante el uso de GPS, lo cual a pesar de ser conocido por la gran mayoría de manera genérica, no se conoce de una forma más detallada en qué consiste, cómo surge, cómo funciona e incluso la forma apropiada del manejo de este tipo de información. De igual forma y a través de la experiencia de otros países, así como la formación inicial que han recibido en nuestro país expertos criminalistas y el intercambio de experiencias, han surgido nuevas ideas y forma en las que la esencia de esta interesante disciplina puede convertirse a corto o mediano plazo en una eficiente herramienta dentro de las ciencias forenses a nivel de país.

CIENCIAS Y DISCIPLINAS QUE INCLUYE LA GEOMÁTICA

La geomática incluye diversas ciencias, disciplinas o técnicas como son la teledetección, la fotogrametría, la geodesia, la cartografía, etc. A continuación, vamos a explicar de manera breve en qué consisten las principales ramas o disciplinas de la geomática.

► Teledetección

La teledetección es un modo de obtener información acerca de objetos tomando y analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los datos estén en contacto directo con el objeto (MIRELES 2017). Este aspecto es muy interesante y según literatura consultada ha sido de gran ayuda en el estudio de delitos ambientales, ya que estos datos son guardados y permanecen o mantienen la información real de un área determinada pudiendo servir como referencia para el estudio de este tipo de casos en los cuales, en el caso particular de nuestro país, debido a múltiples situaciones en la minoría de los casos puede asistirse a realizar la inspección del lugar, toma de muestras y observación de cualquier otro elemento de interés para establecer causas de manera científica, lo anterior afecta en gran medida ya que pueden ir perdiéndose datos de gran valor con el paso de los días.

► Geodesia

Es la ciencia matemática que estudia la forma y tamaño de la Tierra y las posiciones sobre la misma. Por tanto, la geodesia trata de conocer la forma exacta de la Tierra y modelizarla para poder posicionarnos sobre ella.

Esta ciencia se ha utilizado desde hace miles de años y de manera rudimentaria se nos enseñó

desde nuestros primeros años de escuela, sin saber en ese momento la relevancia que esta podría tener en una investigación, el aspecto relevante de esta ciencia dentro de la investigación es el poder posicionar en la tierra personas u objetos, lo cual es la base de los datos obtenidos del sistema de posicionamiento global referido en líneas anteriores.

► Cartografía

La cartografía consiste básicamente en la realización de mapas. Además de la ejecución de los mapas, la cartografía trata de solucionar aspectos como la forma más adecuada de representar la Tierra en una superficie plana. Es la forma rudimentaria y clásica de ubicarnos dentro de un lugar, en Panamá este tipo de mapas son realizados principalmente por el Instituto Geográfico Tommy Guardia e igualmente por uno de los departamentos de la Contraloría Nacional de la Nación los cuales deber mantener constantemente actualizados los datos de cada distrito, corregimiento, barriada, etc., para que pueda estar a la disposición de quienes los requieran.

► Fotogrametría

La fotogrametría según definición obtenida de Wikipedia la enciclopedia libre: es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto.

Una definición más actualizada, de la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS): *“es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos”*.

La palabra fotogrametría deriva del vocablo *“fotograma”* (de *“phos”*, *“photós”*, luz, y *“gramma”*, trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y *“metrón”*, medir.

► Topografía

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales; (véase planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de *«geodesia»* para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana (geométricamente), mientras que para la geodesia no lo es (Wikipedia.org, Consultado agosto 2, 2021).

De esta última se deriva la planimetría y altimetría, ambas utilizadas actualmente dentro de la criminalística en Panamá, tanto en los casos abordados por planimetría propiamente, como en los relacionados con accidentes de tránsito, los cuales son atendido por accidentología forense, quienes presentan la representación, en este caso, de la superficie de interés en la que se da un hecho delictivo.

En la línea de la aplicabilidad de algunas de las modalidades que comprende la geomática, observamos en el proyecto de Grado desarrollado por Fabio Nelson Rodríguez, que lleva por nombre “*Manual De Topografía Aplicado A La Investigación Y Reconstrucción De Accidentes De Tránsito*”, que se exponen diferentes áreas técnicas y fundamentos necesarios, para el entendimiento de los actuales procedimientos técnicos topográficos,

fotográficos y de manejo de escena o procesamiento del lugar de los hechos, aplicados a la reconstrucción de accidentes de tránsito, muertes en balística y otras muertes violentas. De igual forma se aluden las herramientas, técnicas y equipos empleados en la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, siendo esta la intención principal del documento de investigación. Lo anterior nos permitirá conocer que procedimientos y resultados se logran obtener con los diferentes equipos de medición manual-electrónica y plataformas de reconstrucción digital enfocados al ámbito forense; permitiendo conocer la evolución de la topografía en este campo de acción, que considera realizar un manejo más rápido, preciso, eficaz, dinámico e ilustrativo de la labor topográfica aplicada al área reconstructiva forense y el manejo de información criminalística.

FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS.

Las condiciones originales del lugar de investigación son únicas e irrepetibles, por lo que deberemos documentarlas mediante diversos procedimientos (Rodríguez, 2013). La fijación del lugar de los hechos, sus evidencias y demás manifestaciones materiales se efectúa aplicando las siguientes técnicas:

- Descripción escrita (informe escrito de procedimiento, cálculos y localización de EF)
- Fotografía forense (apoyo para la localización espacial de EF y sus características)
- Videografía forense (apoyo para la localización espacial de EF y sus características)
- Topografía forense (localización espacial de EF y lugar de los hechos)
- Modelamiento 3D (representación espacial de EF y lugar de los hechos).

Por otro lado, SANDRA ZANCAJO BLÁZQUEZ en su tesis doctoral “*Geo tecnologías láser y fotogramétricas aplicadas a la modelización 3D de escenarios complejos en infografía forense*”,

presenta elementos interesantes relacionados al estudio de la reconstrucción tridimensional de escenas y objetos para su posterior análisis es un tema objeto de investigación por diferentes disciplinas. Una de las disciplinas en las que se hace necesaria la obtención de modelos 3D es en la ingeniería forense, y más concretamente en el campo de la infografía.

La infografía forense es una técnica que permite la reconstrucción virtual de diferentes hechos a través de la informática y el manejo de imágenes digitales. La gran ventaja que ofrecen las geotecnologías láser y fotogramétricas para la modelización de escenarios complejos en infografía forense es que son técnicas no invasivas y no destructivas. Es decir, a través de ellas quedará constancia documental de los indicios y evidencias presentes en el escenario, sin alterar en ningún momento sus posiciones espaciales ni sus propiedades físicas, además de dotar de rigor, exhaustividad y realismo a la reconstrucción del suceso.

En esta Tesis Doctoral se ha demostrado que la aplicación de diversas geotecnologías tales como, las cámaras digitales convencionales (incluyendo los propios “*Smartphones*”), los escáneres “*Gaming Sensors*” y los sistemas de cartografiado de interiores móviles (“*Indoor Mapping*”), son idóneas en la inspección ocular del delito para su posterior representación gráfica tridimensional.

El método aplicado y las conclusiones a las que llegó en su tesis doctoral Zancajo Blanques, pueden tomarse en cuenta para realizar estudios similares en nuestro país, en un nivel más básico, con los instrumentos de medición con los que en la actualidad se cuentan, o bien introduciendo en esta investigación a profesionales formados en ingeniería, geomática, geodesia o profesiones similares de nuestras universidades, a fin de verificar de forma más efectiva la eficacia y alcance real de estas tecnologías aplicadas al área forense. Entre las conclusiones de Zancajo Blanques se destaca que a través de la adquisición de datos con los sensores pasivos propuestos y de la aplicación de una metodología y un software propio (PWF), se ha conseguido la reconstrucción tridimensional de manera automática y el análisis dimensional de escenas forenses utilizando sólo imágenes. Una gran ventaja de esta herramienta es que las imágenes realizadas para su procesamiento pueden estar tomadas con cualquier tipo de cámara, incluso con cámaras no calibradas y de bajo costo (“*Smartphones*” y “*Tablets*”), lo que permite una gran flexibilidad para aquellas personas no expertas.

LA TECNOLOGÍA GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

El comúnmente conocido GPS por sus siglas en inglés Global Positioning System, se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, en la actualidad se encuentran inmersos en nuestros teléfonos inteligentes principalmente. Por otro lado, y desde hace algunos años, el tema de obtención

de información de individuos a través de dispositivos y control de vehículos, ha sido motivo de debate en otros países, como en Estados Unidos, país que brinda este servicio, el cual inicialmente era exclusivamente de uso militar.

La utilización de esta información para uso de seguimiento o ubicación de un objeto determinado se presentó en un artículo realizado por ALLISON SMITH, Abogada Legislativa de Estados Unidos, el artículo lleva por título *“Law Enforcement Use of Global Positioning (GPS) Devices to Monitor Motor Vehicles: Fourth Amendment Considerations”* (La aplicación de la Ley el uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) de dispositivos para controlar los vehículos Cuarta Enmienda Consideraciones), dentro del cual hace referencia a La aplicación de la Ley al uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) de dispositivos para ubicación y control principalmente de vehículos.

En este interesante artículo hace referencia a lo que en reiteradas ocasiones se ha mencionado en el presente trabajo que *“la tecnología continúa avanzando, lo que fue una vez el pensamiento novedoso, incluso un lujo, rápidamente se convierte en banal, incluso una necesidad”*. La tecnología GPS (Global Positioning System) es un ejemplo. Generalmente, el GPS es una tecnología basada en satélites que revela la ubicación de un objeto determinado. Esta tecnología se utiliza en automóviles y teléfonos móviles para ofrecer a los conductores con la asistencia de dirección. Así como las personas están encontrando cada vez más aplicaciones de la tecnología GPS, los gobiernos estatales y federal también.

Otro aspecto a considerar es el aumento de la dependencia de la tecnología GPS, que se ha dado en los últimos cinco años, lo cual debe plantear consideraciones jurídicas y sociales. Algunos sostienen que la aplicación de la ley de utilización de esa tecnología para rastrear los movimientos de los vehículos de motor proporciona para una sociedad más segura. A la inversa, otros han expresado la preocupación de que la tecnología GPS podría utilizarse para revelar información inherentemente privado. En este sentido el artículo de SMITH, señala que los acusados en los niveles estatal y federal están planteando retos de cuarta enmienda constitucional, pidiendo a los tribunales para exigir el cumplimiento de la ley para obtener primero una orden antes de utilizar la tecnología GPS e igualmente analiza en su contenido los conceptos básicos de la tecnología GPS, la sociedad depende de él, y algunas de las implicaciones de privacidad y legales relacionados.

En este sentido en nuestro país el Ministerio Público es la institución que tiene la atribución de perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, según lo establece el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución Política, por lo cual dentro del marco

de la ley puede solicitar este tipo de datos para una investigación, esto lo establece también el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, fue reglamentada la Ley 81 de Protección de Datos Personales, en su artículo en su artículo 17:

“Condiciones de licitud para el tratamiento: se podrá proceder al tratamiento cuando se cumplan, al menos, una de las siguientes condiciones:

...6. Cuando sea requerido por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones legales, para la salvaguarda de un interés público o por orden judicial.”

Por ello, en muchos países en la actualidad, se ha dado nuevos usos a la tecnología GPS, para así poder ayudar en el seguimiento y la recopilación de pruebas, he aquí algunos ejemplos citados en el artículo publicado por SMITH:

- La policía de Wisconsin, actuando sobre una sugerencia acerca de un antiguo fabricante de metanfetamina, adjunta un dispositivo GPS al coche del sospechoso, esto sí, sin obtener primero una orden judicial. La información registrada en el dispositivo les llevó a una gran extensión de tierra visitada por el sospechoso. Con el consentimiento del propietario, buscaron y encontraron la parafernalia utilizada para la fabricación de metanfetaminas. El sospechoso fue detenido posteriormente.
- La policía de Nueva York utilizó pruebas adquiridas desde un dispositivo GPS (sin obtener primero una orden) que se habían conectado a un sospechoso de robo de coches el año anterior. El dispositivo, que controla el movimiento del sospechoso sin interrupción durante más de dos meses, mostró que el sospechoso había conducido hacia robo el robo de una tienda. Estas pruebas se utilizaron para corroborar el testimonio de un testigo que el sospechoso había estado observando la tienda para determinar sus puntos vulnerables.

Estos ejemplos y otros múltiples casos reportados, en los cuales ha sido utilizada la tecnología GPS, incluso en nuestro país, En donde entre otros ha sido utilizado en la investigación de Delitos Contra la Vida, uno de ellos en el cual mediante las verificaciones de los datos facilitados por la telefónica del ciudadano investigado, pudo constatar que el mismo se había desplazado por una serie de lugares que guardaban clara relación tanto con el hallazgo del cuerpo de la víctima, como el lugar en el cual se le vio con vida por última vez, contrario a lo que este indicaba en su declaración. Lo anterior nos demuestra su utilidad, no solo en datos como tal, sino en la forma que estos pueden ser presentados a través de un plano cartográfico o imagen satelital en un juicio oral, mostrando de forma comprensible a quienes hacen parte del proceso, los sitios exactos a los que se hace referencia mediante la información que brinda este instrumento, que en nuestro país utiliza el modelo del SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL-84 (WGS-84), el cual está basado en las tecnología satelitales y terrestres dentro de un esquema global que unifica y procesa toda la

información con estas modernas técnicas científicas y que se encuentran detalladas en el DECRETO EJECUTIVO N°139 - 30-06-2006 - “POR EL CUAL SE ESTABLECE UN NUEVO MARCO GEODESICO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

Además de la geodesia, también se han incorporado otras disciplinas o ramas de la geomática en nuestro país, como el uso de la topografía para la obtención de datos y presentación de información en casos principalmente relacionados con litigios de terreno, en los cuales podría decirse que el resultado de estos datos topográficos plasmados a través de un informe, en el cual mediante la colecta de datos en campo puede emitirse una conclusión de utilidad para responder la interrogante de la autoridad. Esta misma rama es utilizada en el desarrollo o presentación de información a la autoridad competente en otros delitos.

Para que el perito pueda utilizar estas herramientas, como brazo auxiliar de quienes llevan la investigación, también existe un marco legal, de nuestro país, que abriga algunos de los componentes de la profesión forense, tales como:

“Artículo 28. El artículo 2 de la Ley 50 de 2006 queda así:

Artículo 2. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

3. Identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás experticias técnicas, científicas y/o médico- legales.

10. Servir de centro científico de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la Medicina Legal y las ciencias forenses”

El Código Procesal Penal, Ley 63 de agosto de 2008, incluye también el aspecto de la pericia y la participación en diligencias, dentro de la que se incluyen las que en la actualidad son practicadas principalmente por personal de la Sección de Planimetría Forense:

“Artículo 406. Procedencia. Puede practicarse un peritaje cuando sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un elemento de prueba. La prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes. Solo podrá fungir como perito la persona natural que acredite mediante el respectivo certificado o diploma su idoneidad para la materia sometida a su experticia o dictamen. Se exceptúan los casos prácticos para los cuales no se requiere diploma o certificado de idoneidad, en cuyo caso deberá acreditarse la experiencia.

Artículo 407. Participación en diligencias. Si la naturaleza de alguna diligencia a

realizarse durante la etapa de investigación requiere la asistencia de expertos, el Ministerio Público llevará los peritos correspondientes. Las partes intervinientes también podrán asistir con sus peritos si lo consideran pertinente, siempre que hayan sido anunciados ante el Fiscal. En cualquier otro momento, serán nombrados por el Juez o Tribunal, a propuesta de parte. El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación.”

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de carácter cualitativa descriptiva, dentro de la cual se ha presentado al lector información de valor relacionada al tema y de la cual igualmente se presentarán datos de interés existentes en la actualidad relacionados al tema, mediante un estudio documental y bibliográfico de contenidos relacionados a las ciencias que encierra la Geomática y la aplicación y utilidad que han tenido en diversos ámbitos de la investigación en países de América y Europa, así como la experiencia de nuestro país.

El análisis en base a datos cualitativos, pueden clasificar en dos categorías: estudios descriptivos, los cuales ponen su interés en la descripción de los datos, sin conceptualización ni interpretación, pretendiendo describir de forma fiel la vida, lo que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice y de qué manera actúa. Por otro lado, los estudios interpretativos que pretenden trascender al sujeto social para explicar y comprender hechos o fenómenos sociales más complejos. Todos ellos se apoyan en un acervo teórico profundo del hecho social o del fenómeno cultural sometido a estudio. La Teoría fundada descubre teorías, conceptos e hipótesis a partir de los datos. Siendo un diseño de investigación no experimental, el cual se define según Sampieri como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.

La población utilizada como muestra fue de 68 individuos, afines al área de la criminalística, en diversas áreas, así como los datos e información obtenida del análisis documental de los aspectos relativos al tema, para recopilar información valiosa con la que podamos conocer aspectos importantes de lo planteado, mediante entrevistas y documentos, que por la naturaleza, complejidad y novedad del problema investigado, no existió una manipulación intencional de las variables de estudio, es decir el problema a investigar se estudió tal como se dio en su contexto y se evaluaron en un momento determinado.

Instrumentos De Recolección De Datos y Resultados

En esta investigación se utilizó la entrevista estructurada, la cual se realiza siguiendo una guía

de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. En este caso se procedió a entrevistar de manera verbal, llevando

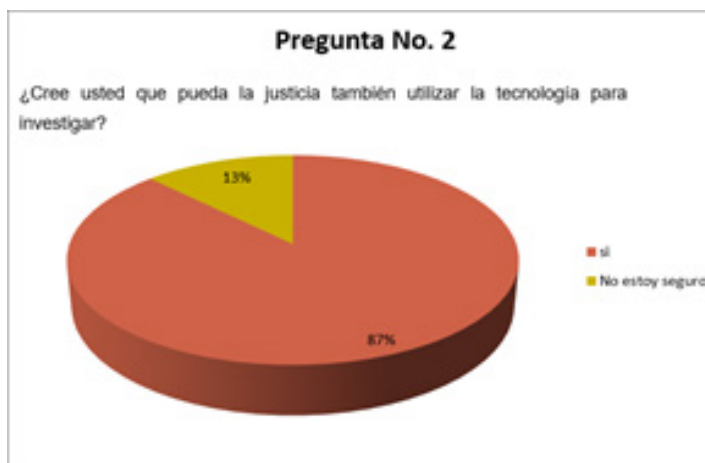
un registro escrito de las preguntas y respuestas a un grupo de personas con el fin de obtener la información requerida para esta investigación. La guía confeccionada para la entrevista constó de nueve (9) preguntas.

La tipología de preguntas utilizadas se desarrolló en base a Grinnell, Williams y Unrau, en el cual se incluyen preguntas generales (gran tour), preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura y preguntas de contraste. Los resultados de las entrevistas se plasmaron mediante la técnica de “agrupamiento”, en el cual primero, anotar temas vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o bien, detectados en las observaciones y documentos. Luego, señalamos cuáles son comunes (se repiten una y otra vez), cuáles son los más distintivos (muy relacionados con el planteamiento) y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Estos últimos se descartan.

Dichos datos fueron procesados de manera cualitativa, basándonos en los resultados de la entrevista que se detalla a continuación, estos ítems nos proporcionaron la información necesaria para la creación del cuadro de agrupamiento, tomando una muestra de veinte (20), del total entrevistado.

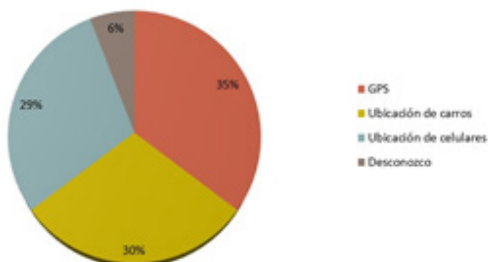
Lista de Temas	Cuales son comunes	Cuales son distintos	Agrupamiento
1	De gran ayuda (4), necesarios en la actualidad (5), son vitales actualmente (4)	No aportan al aprendizaje (1), son complicados (1)	necesarios en la actualidad (5)
2	Si (14)	No estoy seguro (2)	Si (14)
3	GPS (6), la ubicación de carros (6), ubicación en celulares (5)	Lo desconozco (1)	GPS (6), la ubicación de carros (6),
4	información de informática (4), tiene que ver con la tierra (5)	Debe relacionarse a cuestiones robóticas (2)	tiene que ver con la tierra (5)

5	Si (11)	Son costosos (1), no opino (1)	Si (11)
6	Por los GPS (3), para localizar (3), para ubicación (5)	Sería difícil (1)	para ubicación (5)
7	Informando más (7), creando capacitaciones (5)	No sé (2)	Informando más (7)
8	Por supuesto (9), Me encantaría (7)	No (1)	Por supuesto (9)
9	Es novedoso (7), suena interesante (8)	Para probar (1), no se (1)	



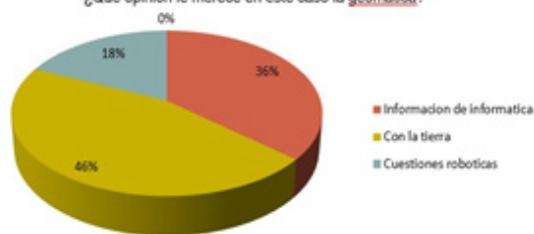
Pregunta No. 3

¿Qué cree usted que es la tecnología relacionada a datos de geolocalización?



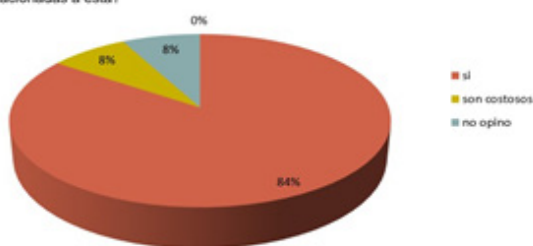
Pregunta No. 4

¿Qué opinión le merece en este caso la geomática?



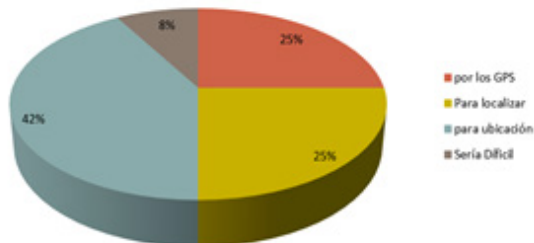
Pregunta No. 5

¿Dentro de las ciencias forenses cree que puedan ser eficaces las técnicas relacionadas a esta?



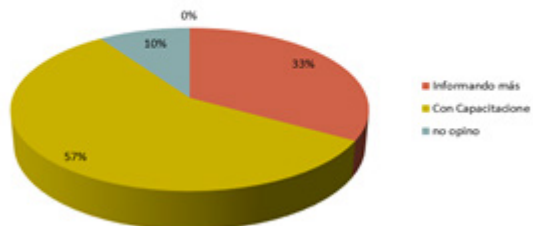
Pregunta No. 6

¿En qué casos cree pueda utilizarse?



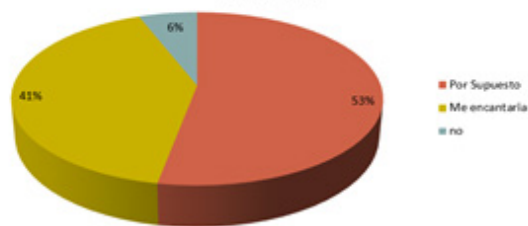
Pregunta No. 7

¿Qué recomendaría para que obtenga mejores resultados el uso de la geomática en Panamá?



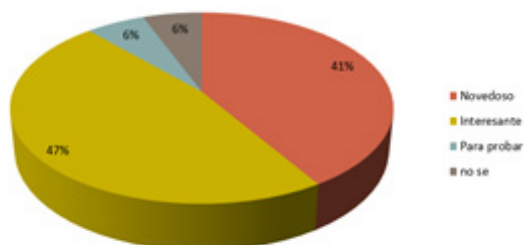
Pregunta No. 8

¿Estaría dispuesto a formarse como experto en esta área dentro de la Criminalística?



Pregunta No. 9

¿Por qué?



Discusión De Los Resultados

Mediante el desarrollo de este cuestionario podemos percatarnos de acuerdo a las diferentes respuestas de los participantes, que en mayor porcentaje están anuentes a que los cambios tecnológicos son beneficiosos y necesarios, así como la disposición de estos a adentrarse y experimentar nuevas formas, métodos y técnicas que puedan aplicarse al campo de las ciencias forenses para investigar diversos delitos en nuestro país, de igual forma consideran que la mejor forma de realizar, incrementar y dar a conocer el uso de la geomática entre los expertos relacionados a las ciencias forenses, así como a quienes intervienen en las investigaciones e incluso en aquellas personas que ejercen o dominan áreas relacionadas a la geomática, es la promulgación, dar a conocer, implementar programas de formación enfocados a la aplicación de esta al área forense.

Es importante acotar que en el desarrollo de la investigación en campo surgieron durante la entrevista otras inquietudes de los participantes, quienes en su mayoría fueron una muestra representativa de personas menores a los 30 años, tales como la forma en que además de las ya mencionadas en los capítulos anteriores podía utilizarse en nuestro país, aspectos relacionados a la geomática.

Lo anterior nos lleva a destacar que en un mayor porcentaje y dentro de la población joven la incorporación de manera más activa y con nuevas técnicas de aspectos relacionados a la geomática, serían de gran éxito en nuestro país y más aún, utilizando estos elementos podremos incluso despertar en el estudiantado métodos de análisis en los cuales pueden compendiar información de diversos aspectos como mencionó la encuestada, no solo de la escena del crimen o lo realizado durante la inspección ocular, sino también aspectos de la investigación. Este último aspecto ha sido un “plus” dentro de mi investigación, ya que como docente resulta sumamente interesante que los estudiantes generen sus propias opiniones y desarrollen destrezas, para que así no se limiten al material que se les proporciona o las indicaciones que se le dan y esto se traduciría en resultados de mejores profesionales dentro de cualquier área de la Criminalística.

CONCLUSIONES

- Se presentó de forma sencilla en que consiste la geomática, siendo aquella que comprende la ciencia, ingeniería y arte que se emplean en la colecta y manejo de información geográficamente referenciada, resulta de gran valor para aportar datos de interés y servir como prueba dentro de diversos tipos de investigaciones.
- De igual forma se observaron las disciplinas que la comprenden como lo son la fotogrametría, topografía, cartografía, geodesia y teledetección y lo que cada una de estas puede aportar al ámbito forense, proporcionando además de los datos científicos

obtenidos, una sustentación y presentación ante los tribunales que respalde los resultados e informe presentado y pueda dar información adicional y de valor dentro de la causa investigada.

- Es importante que también se cumplió con el objetivo de presentar, a través de la experiencia de otros países la forma en que la geomática a través de sus diferentes disciplinas ya ha incidido de manera positiva dentro del ámbito judicial como parte importante en el aporte de recursos, tales como la geolocalización a través de la cual puede verificarse la ubicación de personas o cosas, la topografía mediante el uso de sus principales componentes para deslindar casos relacionados a litigios de terreno en sus diversas formas, así como manera interesante en que se ha utilizado la fotogrametría como forma demostrativa visual, a través del uso de animaciones 3D o presentaciones más reales con datos matemáticos o de distancias de un lugar.
- Del mismo modo es de gran importancia que en nuestro país se desarrollen de igual forma nuevas tendencias, que respalden y puedan integrarse dentro de las ya existentes dentro de la criminalística, tomando en cuenta que los cambios y avances tanto en el ámbito tecnológico, científico, cultural e incluso dentro del desarrollo delincriminal, no se ha estancado y cada día surgen innovaciones, nuevos mecanismos, tecnología a la vanguardia, por lo cual debemos igualmente estar en constante evolución dentro de nuestra área de responsabilidad e incluso innovar, implementar y tratar de validar y poner en ejecución herramientas y métodos que puedan aportar a un resultado igual o mejor que los anteriores.
- Igualmente se presentó en el presente trabajo de investigación la necesidad de incluir nuevas disciplinas, expertos, así como de crear nuevas alternativas de estudio que puedan contribuir al crecimiento y mejora constante de los servicios dentro de la criminalística y ciencias forense, así como realizar un llamado a los profesionales en el área de la ingeniería a realizar aportes que puedan beneficiar las investigaciones y sobre todo contribuir en muchos casos, a que la justicia pueda llegar de manera eficaz a nuestros ciudadanos, incorporando medios de prueba con una mayor validez y sustento científico.
- Con el presente trabajo se observa igualmente las debilidades y fortalezas actuales existentes tanto en nuestro país, como en otros de la región y de Europa con relación a la geomática dentro del ámbito de la investigación judicial

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araque Rojas F., Flores Araque F., De Sá Rodríguez J., Pineda M., Rebolledo Wueffe, R. (2014). Manual De Capacitación Básica En Geomática Para Las Comunidades Organizadas.

- Asociación Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (en línea). España. Disponible en: <http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=29810>
- Código Procesal Penal, Ley 63 de agosto de 2008, Panamá.
- Comunidad ISM. Instituto Superior del Medio Ambiente (en línea). España. Disponible en: <http://www.albireotopografia.es/el-informe-pericial-en-el-ambito-de-la-topografia-y-la-geomatica/>
- Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, fue reglamentada la Ley 81 de Protección de Datos Personales.
- Hernandez Sampieri, R. Metodología de la Investigación (2016), 6ta. Edición, McGraw Hill.
- IDEAL, Corporación de Medios de Andalucía, S.A. (en línea). España. Disponible en: <http://www.ideal.es/tecnologia/gadgets/verdaderos-moviles-crimen-20180105122657-ntrc.html>.
- Lewis, B. (2014). Panoramic Imaging Technology Widens Crime Scene View. TechBeatDated, 3-5.
- Luostarinen, T., &Lehmussola, A. (2014). Measuring the Accuracy of Automatic Shoeprint Recognition Methods. Journal of forensic sciences.
- Monje Alvarez, C. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa, Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Educación Social y Periodismo.
- Quej Tipol, F. (2015). Tipos De Planos Y Métodos Adecuados A Utilizar En El Levantamiento De Croquis En La Escena Del Crimen. San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
- Rodriguez Ortega, F. N. (2016). Manual De Topografía Aplicado A La Investigación Y Reconstrucción De Accidentes De Tránsito, Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Facultad De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Ingeniería En Topografía, Bogotá D. C.
- Smith Allison (2011), Law Enforcement Use of Global Positioning (GPS) Devices to Monitor Motor Vehicles: Fourth Amendment Considerations, Congressional Research Service. Wikipedia Enciclopedia libre. Disponible en: <https://www.wikipedia.org>.
- Zancajo Blázquez, Sandra, Tesis Doctoral “Geotecnologías láser y fotogramétricas aplicadas a la modelización 3D de escenarios complejos en infografía forense”, Universidad De Salamanca, Departamento De Ingeniería Cartográfica Y Del Terreno, Ávila, 2015.

LA NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA, SU NATURALEZA Y EFECTOS JURÍDICOS



Gisel Alejandra Olmedo*
Abogada. Docente Universitaria
<https://orcid.org/0000-0002-0064-5699>
gissy-olmedo@hotmail.com

DOI: 10.37594/cathedra.n16.547

Fecha de recepción: 08/08/2021

Fecha de revisión: 04/10/2021

Fecha de aceptación: 21/09/2021

RESUMEN

El Sistema Registral Panameño ha brindado paz y sosiego a la nuestra sociedad por ciento ocho (108) años y fue establecido con el objetivo de dar fe pública registral, dotando a las inscripciones de publicidad, substantividad y especialidad de los derechos allí reconocidos. De no existir la institución registral pronto nos sucedería la incertidumbre y la confusión social. La existencia del Registro Público de Panamá se sustenta en el Título II del Libro Quinto del Código Civil de la República de Panamá aprobado mediante la Ley N°2 de 22 de agosto de 1916 que comenzó a regir a partir del 1 de octubre de 1917 y con un objetivo específico “*Según el nuevo sistema de registro disminuirán considerablemente las controversias sobre el dominio de inmuebles en que deba hacerse valer el derecho, de prescripción*”.¹ En resumen, la inscripción tiene carácter constitutivo y de seguridad jurídica, debido a que en el mismo rigen los principios de rogación, tracto sucesivo, titulación auténtica, legalidad, publicidad, prioridad, especialidad, legitimidad, de la fe pública que tienen un único propósito: control, orden y claridad en las inscripciones brindando seguridad jurídica a los ciudadanos.

Palabras clave: Derecho, propiedad, inscripción, anotación, error, Derecho Civil, registrador, advertencia, nota marginal.

* Maestría en Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial de la Universidad Latina de Panamá y Egresada del Curso Iberoamericano de Derecho Registral del Colegio de Registradores de España - Universidad Autónoma de Madrid

¹ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Código Civil, documento publicado en la Gaceta Oficial 2,418 de 7 de septiembre de 1916.

THE MARGINAL NOTE OF WARNING, ITS NATURE AND LEGAL EFFECTS

ABSTRACT

The Panamanian registration system has provided balance to our society for one hundred and eight (108) years and was established with the objective of giving public record of faith, providing the registrations with publicity, substantivity and specialty of the rights recognized therein. If the registration institution did not exist, uncertainty and social confusion would soon happen to us. The existence of the Public Registry of Panama is based in Title II of the Fifth Book of the Civil Code of the Republic of Panama approved by Law No. 2 of 22 August 1916 which came into effect from the 1 October 1917 and with a specific objective *“According to the new registration system will decrease considerably disputes over domain property that must assert the right prescription.”* In summary, the registration has a constitutive and legal security nature, because it governs the principles of prayer, successive tract, authentic title, legality, publicity, priority, specialty, legitimacy, of the public faith that have a single purpose: control, order and clarity in the inscriptions providing legal security to citizens.

Keywords: Law, property, registration, annotation, right mistake, Civil Law, registrar, warning, marginal note.

INTRODUCCIÓN

El saneamiento del Registro es un tema registral es de suma importancia. El saneamiento per se, está vinculado estrechamente con el principio de publicidad. En virtud de este principio se entiende exacto el contenido del Registro y opera en beneficio del tercero.

El tema de la publicidad registral y el error, ha sido abordado por el autor español Manzano Solano manifiesta al respecto:

“La esencia de la publicidad registral, como instrumento de seguridad jurídica, radica en la protección a la apariencia creada por el pronunciamiento registral, por la exaltación de los derechos al estado registral. La fuerza de ese estado (amparado constitucionalmente y bajo la salvaguardia de los Tribunales) es de tal naturaleza que, en caso de desacuerdo o discordancia entre Registro y realidad, la presunción legitimadora mantiene aquel sobre ésta.”²

2 MANZANO SOLANO, ANTONIO, Estudios sobre la Hipoteca, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2009, pág. 690

Los sistemas registrales aspiran a mantener la menor cantidad de discordancias posibles, sin embargo, pueden presentarse producto de acciones extra registrales o por producto de acciones registrales como lo pueden ser por ejemplo: el error y la omisión.

Hablemos del error y como forma parte de nuestros sistemas jurídicos, y es analizado desde varias ópticas: el error³ como ***vicio de la voluntad; el error de hecho y el error de derecho***, que es la apreciación inexacta acerca de la existencia o de las cualidades de un hecho, o acerca de la existencia o la interpretación de una norma de derecho; el error en su sentido amplio en cuanto a su ***aplicación en la ley procesal***, que se relaciona con toda desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal incurre al fallar en una causa y simplemente ***el error como equivocación, yerro o desacierto***.

La omisión⁴ puede entenderse en el lenguaje ordinario, y también jurídico, se puede distinguir entre omisión propiamente dicha y comisión por omisión. La Omisión propiamente dicha, consiste en un no hacer, en un no actuar, en un abstenerse. El ámbito del derecho penal, la omisión tiene connotaciones jurídicas y como resultado del delito de omisión suele consistir en el mantenimiento de un estado de cosas, siendo la norma violada una norma preceptiva que ordena un hacer o actuar positivo.

Siguiendo el orden de ideas, el Artículo 1790 del Código Civil abarca los términos error y omisión. Desde la perspectiva del referido código, la acepción del error se concibe como equivocación, yerro o desacierto y en el caso de la omisión es un no hacer, no actuar y se concluye que son producto de actuaciones humanas pero en el caso que nos ocupa son errores u omisiones de un servidor público denominado Registrador General (Director General) que no puede rectificar o corregir, y justo esos errores u omisiones que no pueden ser rectificadas por el Registrador, lo que a la postre trae consigo consecuencias jurídicas.

La consecuencia inmediata de un error que no puede ser rectificado por el Registrador se denomina Nota Marginal de Advertencia y la misma, se encuentra regulada en el Artículo 1790 del Código Civil que citamos:

Artículo 1790: “Siempre que el Registrador notare un error de los que no pueden rectificar por sí, ordenará se ponga al asiento una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficial y la notificará en los estrados del despacho a los interesados, si no pudiere notificarlos personalmente.

3 www.encyclopediajuridica.com/d/error.htm

4 www.encyclopediajuridica.com/d/omision/omision.htm

Esta nota marginal no anula la inscripción; pero restringe los derechos del dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, no podrá hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata. Si por error se inscribiere alguna operación posterior será nula”.⁵

El Artículo 1790 de la lex cit nos describe la consecuencia del error percibido por el Registrador y que no puede corregir, más la norma no describe qué es la Nota Marginal de Advertencia. Para entender de qué se trata, debemos remontarnos a inicios del siglo pasado y la forma cómo se realizaban las inscripciones a principios del siglo pasado.

Las inscripciones se realizaban por el sistema de transcripción manuscrita (puño y letra) y por extractos en libracos y éstos, como un cuaderno escolar, contaban con márgenes en ambos lados de la página (folio). En estos márgenes, se realizaban anotaciones que requerían atención especial y entre esas anotaciones constaban: las notas marginales de advertencia.

Las notas marginales de advertencia son un aviso que, a la vez, contiene la declaración jurada de un servidor público denominado Registrador General (hoy día director general), donde deja constancia que cometió un error ó una omisión que no puede corregir por sí. Sobre este tema, es importante señalar, que las notas marginales de advertencias recaen únicamente sobre asientos y se mantienen vigentes hasta tanto sea subsanado (corregido) el error ó la omisión que la generó.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la nota marginal de advertencia la misma está claramente establecida por la norma civil por lo que claramente se trata de una actuación de carácter administrativo que realizada por el servidor público denominado Registrador General (director general) la cual realiza bajo su propia responsabilidad.

La nota marginal de advertencia no es una orden judicial ni se trata de una medida cautelar, debido a que, en primera instancia, la nota marginal no es decretada por un Tribunal, sino por el contrario es un servidor público sujeto al Órgano Ejecutivo. Es importante recordar la definición de las medidas cautelares, ya sea en el derecho penal ó en el derecho civil y las mismas se clasifican en medidas cautelares personales ó medidas cautelares reales según afecten la libertad personal o la libertad de disposición patrimonial o administración de ya sea del demandado o del imputado. Dependiendo de la medida que se decrete, tendrá por objeto asegurar la resulta del proceso, velando por la seguridad de la sociedad o de la víctima y/o asegurar la existencia de bienes suficientes para

⁵ Subrogado por el Artículo 1 de la Ley N°43 de 13 de marzo de 1925, Gaceta Oficial 4,622 de 25 de abril de 1925.

una eventual reparación o indemnización a esta en la esfera penal o para deslindar una demanda que verse sobre bienes inmuebles, muebles o sobre derechos que se ejerzan sobre una persona jurídica en particular.

Las medidas cautelares son inscripciones de carácter provisional y que tienen por finalidad garantizar la resulta del proceso, y que aplicadas, sacan el bien fuera del comercio de los hombres y limitan el dominio para disponer libremente de los mismos. La nota marginal de advertencia a diferencia de una medida cautelar, restringe los derechos del dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, la rectificación no podrá hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata y si por error se inscribiere alguna operación posterior será nula.

Los efectos de la Nota Marginal de Advertencia se limitan a las operaciones de carácter registral y por ende, no se trata de un mandato judicial sujeto a medidas recursivas, lo que significa que no es sujeta al Recurso de Apelación⁶ porque como ya hemos expresado, son impuestas bajo responsabilidad del Registrador General (Director General) y así lo ha dejado sentado amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia⁷: Resolución de 26 de mayo de 1921, Resolución de 15 de noviembre de 1921, Resolución de 22 de febrero de 1922, Resolución de 22 de febrero de 1961, Resolución de 22 de marzo de 1973, Resolución de 22 de agosto de 1973.

La limitación de carácter registral que impone la nota marginal de advertencia es para evitar que se realicen nuevas inscripciones hasta tanto, se corrijan los errores u omisiones realizados por el Registrador General, por lo tanto, su objeto no es asegurar la resulta de un proceso, restringir ni limitar el dominio sobre los bienes, incluso no anula ni declara ilegal un asiento inscrito ni pendiente de inscripción⁸ De allí nuestra conclusión de que la Nota Marginal de Advertencia no es una orden judicial.

La anotación de la nota marginal no solo debe realizarse sobre el asiento respectivo (donde se cometió el error u omisión) sino que además debe publicarse en el periódico oficial y notificarse en los estrados del Despacho si no pudiera notificarse personalmente del acuerdo al Artículo 1790 lex cit.

En cuanto al levantamiento de una Nota Marginal de Advertencia, es importante recordar, que el Registro Público de Panamá se rige por disposiciones especiales, por ende, no pueden aplicarse a

6 Sentencia de 24 de mayo de 2001, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Rogelio Fábrega.

7 VAN EPS, JUAN, Registro Público de Panamá, Cuarta Edición, 2013, págs.271-273

8 Sentencia de 30 de enero de 2007, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: José Troyano

tales pronunciamientos, las disposiciones generales del Código Judicial sobre apelaciones.

Sólo son recurribles en apelación las resoluciones del Registrador Público que nieguen o suspendan la inscripción de títulos y las que hagan relación con la rectificación de asientos. Por tanto, quedan excluidas del recurso de apelación, con carácter general, las resoluciones que versen sobre notas marginales de advertencia, porque se trata de notas que pone el Registrador bajo su propia responsabilidad:

“En este caso dicho recurso no procede, esto es, tratándose de resoluciones de Registrador en que no accede a poner notas marginales de advertencia, pues tales notas las pone este funcionario bajo su propia responsabilidad, con lo cual garantiza cualquier perjuicio que cause su actuación”. (Cfr. Fallo de 22 de agosto de 1973, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia).

Esto significa, que la negativa del Registrador en acceder al levantamiento de una nota marginal no es objeto de recurso y es precisamente porque no se trata de una medida cautelar. La nota marginal de advertencia es levantada cuando se subsana el error o la omisión que la produjo. La nota marginal no restringe los derechos del dueño, más bien impide operaciones registrales posteriores y si se realizan por error u omisión son nulas.

En este orden de ideas es importante aclarar que las notas marginales de advertencia no son inscripciones provisionales porque ellas por sí no transmiten, modifican ni limitan el dominio sobre bienes inmuebles sujetos a cancelación en virtud de haberse extinguido el derecho de que se trata por el mero transcurso del tiempo o porque el tribunal ordena su levantamiento o dicta un fallo relacionado a un negocio bajo su escrutinio.

Ahora, es importante aclarar que la norma constitucional tiene supremacía sobre las normas legales. Este principio de hermenéutica jurídica ha sido denominado el de *“interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico”*.

Determinada la naturaleza jurídica y los efectos de la Nota Marginal de Advertencia, procederemos a realizar un análisis a la luz de la Constitución Política de la República de Panamá. Una línea de pensamiento considera, que la nota marginal es una limitación al dominio y por ende, la misma solo puede estar impuesta sobre un asiento por un máximo de veinte (20) años, independientemente se haya subsanado o no el error u omisión que la generó.

La Constitución Política de Panamá en su artículo 292 establece un término máximo de veinte

(20) años para las limitaciones temporales al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones, veamos:

*“Artículo 292. No habrá bienes que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles, salvo lo dispuesto en el artículo 62 y 127. Sin embargo, valdrán hasta un término máximo de veinte años las limitaciones temporales al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones”.*⁹

Ahora bien, se hace pertinente hacer un poco de historia porque en la misma se evidencia, como el legislador realizó los ajustes legislativos al artículo 1790 del Código Civil a fin, precisamente de no vulnerar la Carta Magna, veamos:

Código Civil adoptado mediante Ley N°2 de 1916 ¹⁰	Código Civil subrogado mediante Ley N°43 de 1925 ¹¹
<p><i>Artículo 1790: “Siempre que el Registrador notare un error de los que no pueden rectificar por sí, ordenará se ponga al asiento respectivo una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficial a los interesados.</i></p> <p><i>Mientras no se cancele tal nota o se practique en su caso la rectificación, no podrá hacerse operación alguna posterior relativamente al asiento de que se trata”.</i></p>	<p><i>Artículo 1790: “Siempre que el Registrador notare un error de los que no pueden rectificar por sí, ordenará se ponga al asiento una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficial y la notificará en los estrados del despacho a los interesados, si no pudiere notificarlos personalmente.</i></p> <p><i>Esta nota marginal no anula la inscripción; pero restringe los derechos del dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, no podrá hacerse operación alguna posterior; relativa al asiento de que se trata. Si por error se inscribiere alguna operación posterior será nula”.</i></p>

Realizada esta comparación histórica de la norma y como fue subrogada, podemos sustentar la razón por la cual, no coincidimos con el levantamiento de las Notas Marginales de Advertencia utilizando erróneamente como sustento el Artículo 292 de la Constitución Política. En líneas anteriores, definimos la naturaleza jurídica y los efectos de la nota marginal de advertencia, por lo que no concordamos con este criterio por las razones que a continuación detallo:

⁹ Constitución Política de la República de Panamá, publicada en Gaceta Oficial 25,176 de 15 de noviembre de 2004.

¹⁰ Ley N°2 de 22 de agosto de 1916 “Por la cual se aprueban los Códigos Penal, de Comercio, de Minas, Fiscal, Civil y Judicial, elaborados por la Comisión Codificadora” publicada en Gaceta Oficial N°2,418 de 7 de septiembre de 1916.

¹¹ Ley N°43 de 13 de marzo de 1925 “Sobre Reformas Civiles” publicada en Gaceta Oficial N°4,622 de 25 de abril de 1925.

1. La Nota Marginal de Advertencia no es una limitación al dominio sobre bienes muebles o inmuebles, sino por el contrario, la misma solo limita las operaciones de carácter registral hasta tanto sea subsanado el error u omisión que la generó.
2. La Nota Marginal de Advertencia no es una orden judicial que pudiese limitar el dominio de un bien sacándolo del comercio de los hombres para garantizar la resulta de un proceso.
3. La Nota Marginal de Advertencia no es un contrato que garantice obligaciones.
4. La Nota Marginal de Advertencia no es una carga que debe soportar un inmueble.
5. La Nota Marginal de Advertencia no es una inscripción provisional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1778 del Código Civil.

Considerando lo anteriormente expuesto, una Nota Marginal de Advertencia no puede ser levantada utilizando la “Cancelación por el mero transcurso del tiempo” con fundamento el Artículo 292 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino que la misma debe ser levantada de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 1790 del Código Civil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Compendio de Derecho notarial, registral y estado civil,(2009), Superintendencia de Notariado y Registro de la República de Colombia, editorial Legis.
- FERNANDO DE LA PUENTE DE ALFARO, (2010), Medios de Calificación del Registrador y Título cuya nulidad no resulta del mismo: Una Propuesta, Cuadernos de Derecho Registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
- MANZANO SOLANO, ANTONIO, (2009), Estudios sobre la Hipoteca, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, pág. 690
- OLMEDO ARROCHA OSORIO, (2016), Biografía y Genealogía de un Código.
- VAN EPS, JUAN, (2013), Registro Público de Panamá, Cuarta Edición, págs.271-273.

Leyes

- Constitución Política de la República de Panamá, publicada en Gaceta Oficial 25,176 de 15 de noviembre de 2004.
- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Código Civil, documento publicado en la Gaceta Oficial 2,418 de 7 de septiembre de 1916.
- Ley N°2 de 22 de agosto de 1916 “Por la cual se aprueban los Códigos Penal, de Comercio, de Minas, Fiscal, Civil y Judicial, elaborados por la Comisión Codificadora” publicada en Gaceta Oficial N°2,418 de 7 de septiembre de 1916.

- Ley N°43 de 13 de marzo de 1925 “Sobre Reformas Civiles” publicada en Gaceta Oficial N°4,622 de 25 de abril de 1925.

Sentencias de la Corte Suprema de Justicia

- Sentencia de 24 de mayo de 2001, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Rogelio Fábrega.
- Sentencia de 30 de enero de 2007, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: José Troyano

LA CONSULTA PREVIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE TITULARIDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROS, RON Y TRIBALES Y SU INEFECTIVIDAD EN LA PROTECCION DE LOS TERRITORIOS PROTEGIDOS



William Yeffer Vivas Lloreda*

Docente Universitario Universidad del Choco, Colombia

<https://orcid.org/0000-0002-9980-0117>

wwivaslloreda@gmail.com

DOI: 10.37594/cathedra.n16.548

Fecha de recepción: 20/05/2021

Fecha de revisión: 30/06/2021

Fecha de aceptación: 27/10/2021

RESUMEN

La consulta previa como fundamental de titularidad colectiva de los pueblos étnicos, se constituye en un instrumento de defensa de no solo del territorio de las minorías étnicas, sino en un instrumento, derecho fundamental y derecho humano que propicia la defensa de otros derechos básicos de la comunidad y de sus miembros como la cultura, creencias, integridad personal, seguridad alimentaria y pervivencia misma, para ello la consulta previa debería convertirse en un derecho efectivo de protección material y no un derecho de protección meramente formal. Hacer del derecho a la consulta previa un mecanismo o derecho de protección únicamente formal, se constituiría en un instrumento de negación de otros derechos protegidos en la Constitución política de Colombia y en instrumento internacionales como la convención americana de derechos humanos, por ello en este artículo buscando generar un documento que motiva la transformación de este instrumento jurídico de protección formal a convertirse en un instrumento de protección efectiva, de protección material de derechos, en distintos ordenamientos jurídicos.

Palabras clave: derecho fundamental, étnico, consulta previa, territorio, garantía, medio ambiente, cosmogonía

* Candidato a Doctor en Derecho y Magister en Derecho Procesal Constitucional de la UNLZ – Argentina; Especialista en Derechos Procesal Contemporáneo, Magister en Derechos Procesal Contemporáneo de la U. Medellín; Esp. Derecho Procesal Penal – UCC de Colombia; Esp. Derecho Contencioso Administrativo – U. Externado de Colombia; Magister en Derechos Humanos y Dica, Docente Universitario Universidad Tecnológica del Chocó y Universidad Militar Nueva Granada, Coautor de varias obras colectivas de Derecho Procesal Constitucional; Director del Grupo de Investigación Democracia, Constitución e Instituciones Jurídico Procesales, reconocido por Colciencias con código COL019726920190131183, adscrito al Centro de Investigaciones Socio jurídicas SIJUS de la Universidad Tecnológica del Chocó.

PRIOR CONSULTATION AS A FUNDAMENTAL RIGHT OF COLLECTIVE OWNERSHIP OF INDIGENOUS PEOPLES, AFROS, RUM AND TRIBALS AND ITS INEFFECTIVITY IN THE PROTECTION OF PROTECTED TERRITORIES

ABSTRACT

Prior consultation, as fundamental to the collective ownership of ethnic peoples, constitutes an instrument of defense of not only the territory of ethnic minorities, but also an instrument, a fundamental right and a human right that fosters the defense of other basic rights of the community and its members such as culture, beliefs, personal integrity, food security and survival itself, for this, prior consultation should become an effective right of material protection and not a merely formal right of protection. Making the right to prior consultation a mechanism or only formal right of protection would constitute an instrument for the denial of other rights protected in the Colombian police constitution and in international instruments such as the American Convention on Human Rights, therefore in this article seeking to generate a document that motivates the transformation of this legal instrument of formal protection to become an instrument of effective protection, of material protection of rights, in different legal systems.

Keywords: fundamental right, ethnic, prior consultation, territory, guarantee, environment, cosmogony

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA PREVIA

La consulta previa es un derecho fundamental de titularidad colectiva que poseen las comunidades étnicas, que les permite intervenir cada vez que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios¹ que puedan afectarles directa o indirectamente. Mediante este mecanismo, se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica² del estado y garantizar el derecho a la participación de

¹ Según el Convenio núm. 169 de la OIT, el Estado colombiano tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Dichas consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medias propuestas.

² En Colombia, la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se debe efectuar sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades (párrafo del artículo 330 de la Constitución Política de Colombia).

estas colectividades (Rodríguez, La Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes en Colombia, 2010). En este orden de ideas, la consulta y la participación de los pueblos indígenas y tribales, son primordiales para definir la política y la forma como deberá darse aplicación al Convenio núm. 169 de la OIT.

Para Lopera y Dover (2013), La Consulta Previa es un derecho de participación reservado a los grupos étnicos direccionada a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, por parte de los miembros de la comunidad (Dover, 2013).

Según Gloria Amparo Rodríguez (2010):

“La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 37 dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación”. (Rodríguez, La Consulta Previa con Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en Colombia, 2010)

Para la Corte Constitucional, la consulta previa es un derecho fundamental, e instrumento básico para preservar la integridad étnica, social económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar por ende su subsistencia como grupo social³ (Sentencia SU - 383 de 2003), posteriormente la Honorable Corte Constitucional Colombiana, reitero que la consulta previa parte del principio que Colombia es un estado social y democrático de derecho, teniendo como bases el respeto y protección de su carácter pluriétnico y pluricultural, por lo que esta resulta ser un derecho fundamental obligatorio de las comunidades indígenas y Afrodescendientes a ser consultado frente a decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarles y que pongan en riesgo su cultura, sus usos y costumbres ancestrales (Corte Constitucional, T - 175 de 2009).

Para la corte Constitucional en sentencia T – 660 de 2015, siendo magistrado Ponente el Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, al resolver un asunto sobre esta temática en relación con la fundamentabilidad del derecho a la consulta previa dijo:

“[...] El carácter fundamental de la consulta previa es consecuencia de su vinculación con la defensa de la integridad cultural de dichas comunidades, así como de las

3 Sentencia SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte tuteló transitoriamente los derechos de participación, integridad étnica, cultural, social y económica y debido proceso del pueblo indígena U'WA, ordenando que éste sea consultado antes de proferir una resolución de exploración en su territorio. En igual sentido, entre otras, T-652 de 1998 —notas 92 y 160-.

condiciones que permiten su supervivencia como pueblos diferenciados. La consulta previa constituye una garantía específica de las exigencias de equidad distributiva y participación, -propias de la justicia ambiental, en relación con los grupos étnicos- siendo un concepto que toma como punto de partida el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política, donde se establece la obligación estatal de garantizar la participación de las comunidades indígenas previa la explotación de recursos naturales en sus territorios. (Colombiana, Corte Constitucional, 2015, Sentencia de Tutela 660 con Ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt)

1.2. Características

Podemos citar como principales características de la consulta previa las siguientes:

- a. **Es un Derecho Fundamental:** Cuyo objeto es la protección de los derechos étnicos de las comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras y afros se constituye en un derecho fundamental del grupo o comunidad, cuya titularidad es colectiva y el objeto la protección es la comunidad en su cultura, usos y costumbres.
- b. **Es una Obligación del Estado:** La constitución Política ordena al Estado velar y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación de la cual hacen parte los grupos étnicos que la conforman, garantizando el amparo efectivo de sus derechos a la autonomía, identidad étnica y cultural, al territorio, entendiéndose este no como la porción de tierra donde tienen asentadas sus viviendas y parcelas, sino como el entorno en el cual han vivido y se han desarrollado ancestralmente y han llevado a cabo sus prácticas de supervivencia y armonía con el medio ambiente, de igual manera sus derechos a la participación y el desarrollo propio.
- c. **Es un Derecho y Deber de los Grupos Étnicos:** Además de ser un derecho fundamental como se señaló arriba, la consulta previa trae consigo deberes para los grupos étnicos y sus instancias representativas para la protección de estos derechos étnicos consagrados y reconocidos por la jurisprudencia nacional, constituyéndose en una herramienta más que les permita garantizar su pervivencia.
- d. **Es un Proceso:** La consulta previa deberá entenderse como un procedimiento donde se tiene como objeto lograr de forma concertada un acuerdo frente a la realización de actividades, obras o proyectos que afecten los derechos étnicos de estas comunidades de cara a las distintas visiones de desarrollo de las partes, mas no, como un mero trámite donde se omite la participación real y efectiva de los grupos étnicos, con el propósito exclusivo de sacar adelante la ejecución de la obra, proyecto o actividad.

2. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.

La tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos para nosotros no debe verse solo como la posibilidad que tiene los coasociados de acuerdo ante el aparato judicial para el amparo de sus derechos, sino que dichos derechos sean efectivamente protegidos, de tal manera que las medidas adoptadas por el administrador de justicia, protejan en realidad el derecho que se considera violado o amenazado.

Para la corte Constitucional Colombiana en sentencia C – 086 de 2016:

La tutela judicial efectiva ha sido considerada “*expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado*” y “*pilar fundamental de la estructura de nuestro actual Estado Social de Derecho*”. Encuentra sustento no solo en el texto de la Carta Política sino en los instrumentos que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad. Su vínculo con el Preámbulo es de primer orden al estar “*directamente relacionada con la justicia como valor fundamental de la Constitución*”. Apunta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (arts. 1 y 2 CP), entre ellos garantizar la efectividad de los derechos, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas. Además, su consagración expresa como derecho de toda persona refuerza la valía que quiso darle el Constituyente de 1991 en el ordenamiento jurídico (art. 229 CP).

En palabras de este Tribunal, el derecho –fundamental- a la tutela judicial efectiva “*se traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes*”.

El concepto de “*efectividad*” que acompaña este derecho supone que el acceso a la justicia no se circunscribe a la existencia de mecanismos nominales para poner en marcha la administración de justicia, sino que exige un esfuerzo institucional para restablecer el orden jurídico y garantizar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP). (Corte Constitucional; Sentencia C - 086 de 2016)

Visto el desarrollo de la corte Constitucional, sobre la tutela judicial efectiva esta no se

circunscribe solo al acceso a la justicia, por el contrario esta hace un llamado a los administradores de justicia y al funcionario ejecutivo, la garantía de sus derechos de manera completa, esto es, que no solo se agote el procedimiento para acceder al derecho, sino además se garantice y materialice el derecho.

Para Rocío Araujo (2011), el derecho a la tutela judicial efectiva, además de recoger las garantías que imponen la plenitud de las garantías procesales y que tienden a proteger al ciudadano frente al trámite procesal de la causa, que se resumen en el derecho de acceso a la justicia, en el debido proceso y en el derecho a la defensa, a más de estos derechos, constituye un mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado, sean estos administrativos o judiciales, para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, ante el reclamo o pedido de protección ante una violación o amenaza (Araujo, 2011).

Teniendo claro el concepto de tutela judicial efectiva, relacionado específicamente con la labor de los jueces en la protección del derecho, consideramos que la protección efectiva de los derechos debe ir más allá del proceso y el órgano jurisdiccional, debe ser un imperativo de la labor diaria de quienes ejercen función pública, esto es, si la consulta previa tiene como fin último proteger los derechos bioculturales de las comunidades étnicas a poder participar y decidir sobre las acciones, decisiones, obras o actividades que tengan incidencia en su territorio, el concepto de estos derivado de la consulta debiera tener efecto vinculante, lo que resultaría una protección efectiva a sus derechos.

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de Fundamental otorgado al Derecho de Consultar con las minorías étnicas las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos y el hecho de que, aún Ius Fundamental, la consulta previa no conlleva consigo per se, la posibilidad de vetar o imposibilitar la realización de proyectos, obras o actividades, en caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, pues en dicho caso se aplica el test de proporcionalidad, que estará en cabeza del Ministerio del Interior, quien resulta ser el encargado de hacer un análisis sobre la necesidad de la obra o proyecto y que corresponda a intereses del gobierno, por lo que la negativa de la comunidad no se constituye en un impedimento para su ejecución, lo que haría de este un derecho de protección formal y no material, y decimos que de protección formal, por cuanto no es posible que la negativa de la comunidad paralice, imposibilite la intervención en su territorio, si hecho el test de proporcionalidad la intervención a realizar resulta ser de interés nacional, dicho de mejor manera es política del estado con base en su programa de gobierno y plan de desarrollo.

La anterior afirmación en razón de que la misma organización Internacional del Trabajo,

preciso que el derecho a la consulta previa no constituye un derecho al veto, lo que indica la OIT en el artículo 7 es que los gobiernos realicen consulta a las comunidades étnicas que conlleven a que estos tomen parte en las decisiones que se adopten y afecten su territorio, afirmación esta acogida por nuestra corte constitucional en sentencia T – 661 de 2015.

No permitir que en el proceso de consulta previa las comunidades étnicas puedan vetar la realización de algún tipo de intervención en su territorio, hace de este derecho fundamental, un derecho meramente formal y no una consagración para la protección material de los derechos étnicos de las minorías residentes en un país; la consagración del derecho fundamental de la consulta previa, tal y como está regulada en la actualidad es una protección al derecho de información y no un derecho a la protección de los derechos ancestrales del grupo social.

Dice Claudia Jimena Abello (2012), que dichas limitaciones tienden a tornar en etéreo y poco eficaz este Derecho y Garantía Constitucional, que bien aplicado y ejercido, podría constituirse como pilar fundamental para la continuidad y conservación de las C.N.A.R.P. y sus integrantes (Abello, 2012).

Tal y como lo indica Carlos Eduardo Salinas (2011):

“es importante distinguir la consulta previa, libre e informada del consentimiento previo, libre e informado; la primera institución fue establecida mediante el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, mientras que la segunda institución surge de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de la 61.ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas.

El consentimiento previo, libre e informado en el Convenio 169 es restrictivo y excepcional (sólo cuando se necesite reubicar a la comunidad), y sin este consentimiento no es posible, aún así ello no constituye un veto, por lo que nos permitimos transcribir el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT” (Salinas, 2011)

El veto como respuesta a la consulta que se le realice a una comunidad étnica y que este tenga efectos en la no realización de la actividad u obra a ejecutar, constituiría en una verdadera materialización de la protección de los derechos étnicos, por cuanto el derecho étnico procura proteger de las comunidades su cultura, costumbres, creencias, medio ambiente sano, entendido este como derecho humano de carácter fundamental (Vivas, 2018) y su territorio; tener la consulta previa como un derecho formal, en el cual la obligación del estado esta simplemente en consultar y el producto de la consulta en caso de ser negativa no acatarlo, por las razones que se quieran

esgrimir hacen de la consulta previa un derecho y procedimiento engañoso en relación con la realización y protección material de los derechos antes descritos.

2.1. LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA

Como lo indica Francisco J. Bastidas, en la Obra la Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978:

“La eficacia de los derechos fundamentales, como la de cualquier otra norma constitucional, sólo puede ser medida en términos jurídicos a partir de la aptitud de su contenido normativo para la consecución de su objeto, la garantía de un determinado ámbito de libertad personal” (Francisco J. Bastidas, 2004).

Para José Juan Anzures Gurriá (2010), los derechos fundamentales desde la perspectiva objetiva, son valores reconocidos por toda la sociedad y que sirven de base, para legítima la existencia del estado, correspondiéndole al estado como organización política dar efectividad al contenido del derecho, de tal manera que no se convierta en una consagración meramente formal, sino en un amparo real de los intereses del individuo y la comunidad. (Anzures, 2010)

¿Qué es un derecho efectivo?, para responder esta pregunta partiremos por dar el significado de efectivo según la Real Academia de la Lengua (RAE):

Efectivo: adj. Real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o nominal (Española, Real Academia, 2017).

Teniendo en cuenta la anterior definición, es un derecho resulta ser efectivo en la medida en que la consagración contenida en él, se convierte en una protección real y verdadera del bien jurídico o interés jurídicamente protegido, su protección no es quimérica no es simplemente formal o nominal, su protección es real o materialmente se protege el derecho que se pretende salvaguardar.

Dicho lo anterior procedemos a formular la siguiente pregunta: ***¿Es la consulta previa un derecho efectivo?*** Debemos advenir desde ya que para nosotros no resultar ser un derecho efectivo, la consagración y regulación existente hoy de la consulta previa resulta ser un trámite formal, para consultar a las comunidades que piensan sobre algún proyecto o actividad que los afecte en su territorio, creencias y cultura, sin que el concepto o decisión de ellos en el proceso de consulta, condicione la ejecución de dicha actividad, proyecto u obra, si aplicando el ***test de proporcionalidad*** a que nos referimos anteriormente el Estado llega a la conclusión que esta intervención hace parte de las políticas de desarrollo de dicho gobierno, aunque en la aplicación de dicho test de proporcionalidad en relación con el desarrollo de dicha comunidad, se está aplicando

un modelo de desarrollo distinto a la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos étnicos, cabe resaltar aquí que en la aplicación de dicho test y que se desconoce la decisión de la comunidad (decisión que se adopta mediante el veto en la consulta) constituye una violación clara del artículo 7 y 8 de la constitución política de 1991, por cuanto no se estaría respetando la diversidad étnica y cultural de la nación que demanda la carta política, ni mucho menos el estado estaría cumpliendo con la obligación traída en el artículo 8 citado de proteger las riquezas culturales de la nación, tal y como esta consagrada la consulta previa no protege materialmente los derechos de las comunidades étnicas, su consagración hacen de este derecho fundamental una protección formal.

La protección que demandan las comunidades étnicas de sus derechos se encamina a se les otorgue a estas la capacidad de decidir sobre la suerte del territorio que ancestralmente han ocupado y conservado; si bien la corte constitucional ha indicado en su jurisprudencia que el derecho a la consulta previa no implica un poder de veto por parte de las comunidades consultadas, se hace necesario que el legislador haga una real protección de los derechos étnicos y darle vida a los principios traídos en la constitución misma, los que claramente tienden como ya lo indicamos a la protección de la diversidad cultural y con ello el pensamiento de los pueblos en su visión de desarrollo, lo que se traduciría en el respeto al derecho de la autodeterminación de los pueblos, son estos quienes pueden decidir su modelo de desarrollo de acuerdo a su cosmovisión; lo anterior demanda de una regulación mucho más estricta de la consulta previa, donde el no consentimiento de la comunidad se traduzca en un veto a las medidas legislativas o administrativas a aplicar, ello si constituiría una verdadera protección del derecho a la etnicidad, derecho a la etnicidad que contempla varios derechos entre ellos el derecho al territorio, a la cultura, a sus prácticas tradicionales, a la autodeterminación, uso y goce del medio ambiente etc.

La efectividad de los derechos es un imperativo de los estados, por tal razón el convenio N° 169 de la OIT, en su Artículo 2 indica:

*“1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan **la plena efectividad** de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”*

“Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte

a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Se desprende del articulado antes citado del convenio 169 de la OIT, que los estados miembros del convenio deberán buscar la efectividad plena de los derechos de las comunidades étnicas, otorgándosele a las comunidades el derecho de decidir su propio modelo de desarrollo de tal manera que no afecte su vida, creencias, instituciones ancestrales, territorio y bienestar general de la comunidad.

2.2. FUNDAMENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA

El derecho a la consulta previa tiene un fundamento jurídico en normas de carácter nacional, como en instrumento internacionales, los que hacen de la consulta previa un derecho no solo fundamental, sino un derecho humano, al que los estados tienen el deber de respetar y que relacionamos así:

a. Instrumentos Nacionales.

- ✓ **Constitución Política de Colombia de 1991**, en nuestra carta encontramos varios artículos que se refieren al derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas, en pro de defender el derecho a su cosmogonía, como se indica a continuación:

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Parágrafo Artículo 330. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

- ✓ **Ley 21 de 1991 del 4 de marzo de 1991.** Con la promulgación de esta ley, el Estado colombiano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado por la 76a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, en Ginebra, 1989.
- ✓ **Ley 70 de 1993.** Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Es así como se encuentra que, en el Capítulo I, donde se establece el objeto y definiciones, en su artículo 1, se tiene que:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

- ✓ **Ley 99 de 1993.** por la cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Artículo 76. De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.

- ✓ **Ley 165 de 1994.** Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: (...)j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos

conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

- ✓ **Decreto 1320 de 1998.** Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Artículo 2do. determinación de territorio. La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.

- ✓ **Decreto 2820 de 2010.** Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Aquí se encuentra que, frente a nuestro objeto de estudio, en el Artículo 15, se presenta un mandato directo en lo referente a la participación de las comunidades en lo correspondiente a la intervención por parte del Estado o de particulares en sus territorios, en el artículo 15 así:

Artículo 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso.

En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

- ✓ **Ley 1437 de 2011,** Artículo 46 (CPACA). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el Capítulo II, trata de los Mecanismos de consulta previa, que el Artículo 46 dice:

Artículo 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa,

dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar.

- ✓ ***Directiva Presidencial 001 del 26 de marzo de 2010.*** La cual establece como asunto primordial la garantía del Derecho Fundamental a la Consulta Previa de los Grupos Étnicos Nacionales, encontramos que en el numeral 4, literal a), establece las fases que debe cumplir así: a) Preconsulta⁴, b) Apertura del proceso, c) Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo, d) Pre-Acuerdos, e) Reunión de Protocolización, f) Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos, g) Cierre del proceso de Consulta Previa. Estas fases se entenderán como un protocolo sugerido por el Grupo de Consulta Previa, y su aplicación estará supeditada a los acuerdos establecidos por la comunidad en consulta y el interesado.
- ✓ ***Directiva Presidencial 010 del 7 de noviembre de 2013.*** Donde en su asunto principal establece una guía para la realización de consulta previa. En resumen, tenemos que esta directiva desarrolla el proceso de Consulta Previa el que indica que está integrado por: a) certificación, b) coordinación y preparación, c) pre consulta, d) Consulta previa, e) Seguimiento de acuerdos.

b. Instrumentos Internacionales.

Dentro de estos podemos destacar los siguientes:

- ✓ ***Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas de 2007.***
En esta declaración en su artículo 5° se indicó que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

⁴ Fase de Preconsulta definida por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 461 de 2008

✓ ***Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.:***

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

- ✓ ***Convenio 107 de 1957 de la OIT.*** Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Entrada en vigor: 02 junio 1959). Consagra de manera general, algunos derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios que habían habitado tradicionalmente, pero en ningún momento tocaba el tema de la consulta a las comunidades como mecanismo de protección de esos derechos. Este convenio fue ampliamente criticado por la comunidad internacional por tender hacia la integración a la modernidad de los pueblos indígenas, debido a que se refería a ellos como “*poblaciones*”.

Frente al Convenio 107 de 1957 de la OIT, se hace necesario aclarar que no fue ratificado por Colombia.

- ✓ ***Convención Americana de Derechos Humanos:*** Esta en su artículo 1 estableció que “*los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*”

Y en el artículo 21 que trata del derecho a la propiedad privada, en el inciso 1º indica:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

3. Desarrollo de la Consulta Previa en la Jurisprudencia de la Corte idh.

- ✓ ***Caso pueblo indígena kichwa de sarayaku vs. Ecuador:*** Sentencia de 27 de junio de 2012, los hechos del presente caso tuvieron ocurrencia en la región de la provincia de Pastaza, donde habita el pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. Esta población, subsiste de la agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y la recolección de productos agrícolas; un

contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque No. 23 de la Región Amazónica, El Pueblo Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el Estado con la empresa CGC ni de las condiciones en las que se celebró el Acta.

Para la Corte idh,

“(…) no se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku antes de emprender o de autorizar el programa de prospección o explotación de recursos que existirían en su territorio. En definitiva, el Pueblo Sarayaku no fue consultado por el Estado antes de que se realizaran actividades propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectarían sitios de especial valor cultural(…).

“(…)La Corte estableció que el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática; además la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación, que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”.

“(…)Para la corte al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. Puesto que el goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad comunal sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar su supervivencia social, cultural y económica. Asimismo, se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la identidad de los pueblos indígenas, señalando que en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas” (Corte idh, 2012).

- ✓ **Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay:** Sentencia de 17 de junio de 2005 a finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas. En esa misma época y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por parte de empresarios británicos, comenzaron a instalarse varias misiones de la iglesia anglicana en la zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de la zona. Los indígenas que habitaban estas tierras fueron empleados en dichas estancias.

Este Tribunal ha resaltado que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras.

Para la Corte idh, (...)la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural(...). En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. Al respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el término “bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “*aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor*” (Corte Idh, 2005).

Por ultimo indica la corte que al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros.

- ✓ **Caso Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua:** el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62 mil hectáreas aproximadamente a la empresa SOLCARSA, sin que la Comunidad hubiese sido

consultada al respecto. La Comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio

En esta decisión la corte idh precisa que no es necesario la existencia de un título de propiedad para que el Estado proteja el territorio donde estén asentada la población indígena, que la sola posesión de estos con base en su derecho consuetudinario les otorga el derecho al uso, goce y protección por parte del estado, a quien le corresponde el deber de delimitar e identificar los territorios de propiedad de la comunidad y el uso y goce libre de los bienes que se encuentren dentro de dicho territorio (Corte Idh, 2001).

CONCLUSIONES

La consulta previa es un derecho fundamental de titularidad colectiva que poseen las comunidades étnicas, cada vez que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que puedan afectarles directa o indirectamente. Mediante este mecanismo se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades (Rodríguez, La Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes en Colombia, 2010)

La consulta previa como derecho fundamental y a la vez un derecho humano de las comunidades étnicas, tiene por finalidad la protección del territorio donde se asientan estos en sus usos, creencias, cultura y costumbres acorde a su cosmovisión.

La consulta previa como derecho fundamental, resulta ser un derecho ineffectivo, en razón a que la negativa o el veto de la comunidad frente a una decisión administrativa, obra o inversión no imposibilita su realización, en la medida que dicha intervención sea parte de un política de estado en materia de desarrollo o económica, en estos casos la consulta previa es solo un procedimiento y con un contenido de protección formal mas no material; lo anterior excepto de los tres casos de que trata la convención 169 de la OIT y desarrollados por la Jurisprudencia de la Corte Idh a saber: A) Traslados de las tierras que ocupan y su reubicación. B) Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas. C) Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio; solo en estos casos la falta de consentimiento de la comunidad se constituye en un veto o prohibición en la realización de una actividad que afecte la integridad del grupo.

Para que la consulta previa resulte ser un derecho efectivo y con ello proteger los derechos étnicos de titulación individual como también los de titularidad colectiva como el territorio, se requiere que la consulta previa junto con el resultado de la consulta, se conviertan en una protección real y verdadera del bien jurídico o interés jurídicamente protegido; que se trascienda de lo que existe hoy una protección formal o nominal, y se pase a su protección real o material, en este momento podríamos hablar de la efectividad del derecho a la consulta previa.

La protección que demandan las comunidades étnicas de sus derechos a través de la consulta previa, va dirigida a que se les otorgue la autonomía real de decidir sobre la suerte del territorio que ancestralmente han ocupado y conservado; si bien la corte constitucional ha indicado en su jurisprudencia que el derecho a la consulta previa no implica un poder de veto por parte de las comunidades consultadas, se hace necesario que el legislador haga una real protección de los derechos étnicos y darle vida a los principios traídos en la constitución misma, los que claramente tienden a la protección de la diversidad étnico-cultural y con ello el pensamiento de los pueblos en su visión de desarrollo, lo que se traduciría en el respeto al derecho de la autodeterminación de los pueblos étnicos, siendo estos quienes pueden decidir su modelo de desarrollo de acuerdo a su cosmovisión, que contempla varios derechos entre ellos el derecho al territorio, a la cultura, a sus prácticas tradicionales, a la autodeterminación, uso y goce del medio ambiente.

Hacer de la consulta previa un derecho meramente formal, se constituiría en una negación de los derechos que constitucionalmente y en instrumentos internacionales se le reconocen como reivindicaciones a las comunidades étnicas, la consulta previa debe necesariamente que pasar de ser un procedimiento de chequeo, para dejar registros probatorios de su realización a convertirse en el derecho fundamental efectivo que demanda la jurisprudencia de la corte constitucional, pero adicionándole que la falta de consentimiento de la comunidad imposibilitaría la realización de cualquier tipo de intervención en su territorio, esto último exactamente a nuestro entender haría de la consulta previa un derecho efectivo.

La falta de efectividad de este derecho humano de las comunidades étnicas, conduce a un desconocimiento sistemático de instrumentos internacionales y con ello el bloque de convencionalidad, el que resulta ser de imperioso cumplimiento, para los estados que se acojan a un tratado, pacto o convención que proteja derechos no solo a las personas sino, a la comunidad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abello, C. J. (2012). Consulta Previa en Casos de Minería para Comunidades Indígenas y Tribales. *Trans-Pasando Fronteras*, 111 - 124.
- Anzures, J. J. (2010). La Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales. *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*(22). Obtenido de: [La%20Consulta%20Previa%20como%20Derecho%20Ineficaz/la%20eficacia%20horizontal%20de%20los%20derechos.pdf](#)
- Araujo, R. M. (Mayo de 2011). Acceso a la Justicia y Tutela Judicial Efectiva. Propuesta para fortalecer la Justicia Administrativa. *Vision de Derecho Comparado. Estudios Socio-Jurídicos*, 247-291. Obtenido de <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1513>
- Cconst. Sentencia T - 129 de 2011.
- Cconst. Sentencia T - 175 de 2009.
- Corte Constitucional. (T - 175 de 2009). Sentencia C - 175 de 2009. Bogotá.
- Corte Constitucional; Sentencia C - 086 de 2016, C - 086 (Corte Constitucional del Colombia).
- Corte Idh. (2001). Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
- Corte Idh. (2005). Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
- Corte idh. (2012). Caso pueblo indígena kichwa de sarayaku vs. Ecuador.
- Dover, G. P. (2013). Consulta Previa, ciudadanías diferenciadas y Conflicto Socioambiental. *Boletín de Antropología*, 28(45), 76 - 103. Obtenido de <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/view/17771/15338>
- Española, Real Academia. (25 de 09 de 2017). <http://www.rae.es/>. Obtenido de <http://dile.rae.es/?id=bJeLxWG>: <http://www.rae.es/>
- Francisco J. Bastidas, I. V. (2004). Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978. Tecnos. Obtenido de <https://www.uniovi.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/librodf.PDF>
- Rodríguez, G. A. (2010). La Consulta Previa con Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rodríguez, G. A. (2010). La Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Salinas, C. E. (2011). La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia. *Derecho del Estado*(27). Obtenido de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>
- Sanjines, I. B. (2010). Lecciones Aprendidas Sobre Consulta Previa. La Paz, Bolivia:

Centro de Estudios Juridicos e Investigacion Social - CEJIS.

- Sentencia SU - 383 de 2003, 383 (Corte COnstitucional).
- Vivas, W. Y. (2018). El Amparo Ambiental a la Luz de la Jurisprudencia de la Corte Idh y la Corte Constitucional de Colombia. En J. Cubides, Cuestiones Dialecticas en Torno a los Derechos Humanos y Paz (págs. 413 - 438). Instituto de Memoria Editora & Proyectos Culturais.

Sentencias Corte Constitucional Colombiana.

- Sentencia SU – 039 de 1997.
- Sentencia SU – 383 de 2003.
- Sentencia T – 778 de 2005.
- Sentencia C – 1194 de 2008
- Sentencia T – 175 de 2009.
- Sentencia T – 129 de 2011.
- Sentencia C – 187 de 2011.
- Sentencia T – 691 de 2012.
- Sentencia C – 214 de 2013.
- Sentencia T – 660 de 2015.
- Sentencia T – 661 de 2015.
- Sentencia C – 086 de 2016.

Leyes, Decretos y Directivas.

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 21 de 1991
- Ley 70 de 1993
- Ley 99 de 1993
- Ley 165 de 1994
- Ley 1437 de 2011
- Decreto 1320 de 1998
- Decreto 2820 de 2010.
- Directiva Presidencial N° 001 de 2010.
- Directiva Presidencia N° 010 de 2013.
- Constitución Política Bolivia de 2009
- Ley 222 de 2012 Bolivia.
- Ley 3018 de 2015 Bolivia.
- Ley 29785 de 2011 Peru.

- Convenios y Tratados Internacionales.
- Convenio 169 de la OIT
- Convenio 107 de la OIT.
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
- Declaración de las Naciones Unidas Sobre Protección de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
- Convención Americana de Derechos Humanos.

Páginas Web.

- www.corteconstitucional.gov.co
- www.cortesuprema.gov.co
- www.presidencia.gov.co
- www.corteidh.or.cr
- www.presidencia.gob.bo
- www.presidencia.gob.pe
- www.mininterior.gov.co
- www.un.org
- www.oas.org

LA TENTATIVA DE HOMICIDIO Y SU DIFICULTAD DE APLICACIÓN EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO



Carlos A. Sánchez V.

Licenciado en Criminalística y Ciencias Forenses y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas.

Asistente Operativo de la Fiscalía Regional Metropolitana de la Sección de Decisión y Litigación Temprana.

<https://orcid.org/0000-0002-3784-8043>

albertocasv@gmail.com

DOI: 10.37594/cathedra.n16.549

Fecha de recepción: 12/09/2021

Fecha de revisión: 15/10/2021

Fecha de aceptación: 21/10/2021

RESUMEN

Nuestra Constitución Política de la República de Panamá, ampara muchas Garantías Fundamentales como bien jurídico tutelado una de ella es la vida, en este artículo encontraremos la forma imperfecta de realizar el Delito de Homicidio, es decir su grado de tentativa. Exponiendo aspectos importantes para la materialización y cómo se aplica en nuestra legislación penal panameña, ante todo; ver la dificultad que esto acarrea a la hora de realizar una investigación objetiva, bajo los parámetros de la propia conducta delictiva considerada delito (tipicidad, antijuricidad, y culpabilidad).

Palabras clave: Bien jurídico, Delito, Homicidio, Legislación Penal, Conducta, Investigación Objetiva, Grado de Tentativa.

THE HOMICIDE ATTEMPT AND ITS APPLICATION DIFFICULTY IN THE PANAMANIAN CRIMINAL PROCESS

ABSTRACT

Our Political Constitution of the Republic of Panama protects many fundamental guarantees as a protected legal asset, one of which is life, in this article we will find the imperfect way to carry out the Crime of Homicide, that is, its degree of attempt. Exposing important aspects for the materialization and how it is applied in our Panamanian criminal legislation, first of all; see the difficulty that this entails when carrying out an objective investigation, under the parameters of the criminal conduct itself considered a crime (typicity, unlawfulness, and guilt).

Keywords: Legal good, Crime, Homicide, Criminal Legislation, Conduct, Objective Investigation, Degree of Attempt.

Definición de Tentativa

«En principio hablamos de delito imposible cuando el agente tiene la voluntad de ejecutar un tipo legal, quiere generar un resultado delictuoso, está convencido de poder lograrlo como lo ha planeado y realiza todos los actos encaminados a tal fin, pero la consumación de la infracción es imposible por la naturaleza inidónea de los medios empleados, del objeto o del sujeto pasivo hacia el cual se dirige la acción». (Torres, 2019, pág. 77)

Nuestro Código Penal hace énfasis en los artículos 48 y 49, del mismo un énfasis en cuanto a la forma imperfecta de realización del Delito, expresando lo siguiente:

“Artículo 48. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 49. Si el agente desiste voluntariamente de la ejecución del delito o impide que el resultado se produzca, sol responde criminalmente si los hechos realizados constituyen otro delito.” (Pujol, 2015, pág. 9)

Lo importante, es que toda tentativa demuestra no haber sido adecuada para consumir el delito; pueden distinguirse las acciones que en un principio eran capaces de la consumación, aunque luego sean insuficientes por circunstancias ajenas a la voluntad del agente surgidas antes, durante o con posterioridad a la realización de todos los actos que le eran previsibles al sujeto activo para la ejecución del delito; y aquellas que aparecen como incapaces de lesión desde un primer momento.

El Código Orgánico Integral Ecuatoriano, define la tentativa como: *“Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado”.*

Dice CARRARA, al referirse a la tentativa: *“cualquier acto externo que por su naturaleza conduce unívocamente a un resultado criminoso, y que el Agente dirige con explícita voluntad a ese resultado, pero al cual este no le sigue, ni tampoco la lesión de un derecho superior o equivalente al que se quiere violar”.*

Para FRANZ VON LISZT, la tentativa de delito es:

“La manifestación de voluntad dirigida a la ejecución del hecho.

- Hay tentativa, en primer lugar, cuando la manifestación de la voluntad dirigida a la producción del resultado (es decir, emprendida en la creencia de que el resultado sobrevendrá) queda sin efecto.

- Más hay también tentativa cuando no ha existido o no se ha producido una de las circunstancias esenciales constitutivas del hecho, (abstracción hecha del resultado), cuya existencia o producción había supuesto del autor”.

Bien explicaba el ZAFFARONI en cuanto al Delito en Grado de Tentativa, y se explica en el presente libro que: *“la conducta que se halla entre la preparación y la consumación, siendo claramente determinable el límite que separa de la consumación, pero siendo sumamente problemática respecto de los actos preparatorio”.* (Torres G. E., 2020, págs. 36-37)

Por otro lado, el Diccionario Jurídico – Teórico Práctico, el término como *“Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producirse el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.”* (Morales, 2017, pág. 809) De igual forma, el Diccionario Jurídico. -6ª Ed., define el término como: *“principio de ejecución de un delito por actos externos que no llegan a ser lo suficientes para que se realice el hecho, sin que haya mediado desistimiento voluntario del culpable...”* (Casado, 2009, pág. 796)

Y así de lo anterior, un sin número de autores definen el término de esta manera, la manera imperfecta o que se corta de la consumación del tipo, en este caso en materia penal. Panamá no escapa de esta realidad, se han perpetrado a lo largo de la historia una serie de delitos en este tipo de grado, en tentativa y que su consumación no llega al fin material, es decir, hay una reducción del agente a la comisión del delito.

Bien Jurídico Tutelado (La Vida)

Antes de entrar a ver el bien jurídico tutelado en cuanto a la problemática del concepto, tenemos una definición de Delito donde Jiménez de Asúa, expresó que *“el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o medidas aseguradoras.”*

Nuestra Carta Magna, señala en su artículo 17, que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, así asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, cónsono esto con lo que señala el artículo 1 del Código Penal panameño, que se fundamenta en el respeto a la Dignidad Humana y que se no solo está asociado al tema en particular, La Vida, sino otros bienes jurídicos que son afectados.

En el desarrollo de este artículo veremos cómo se afecta en grado de tentativa el bien jurídico muy importante, que es la vida, así lo ratificamos con lo que señala el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre el derecho a la vida.

Ahora bien, este bien jurídico tutelado en nuestro Código Penal está enmarcado dentro del Segundo Libro que versa precisamente sobre LOS DELITOS, es decir, lo que se puede afectar y que va contra la Ley, desarrollado en los artículos 131, 132, 132-A, 132-B, que versa precisamente sobre LOS HOMICIDIOS en su primera sección y en el caso en particular de manera dolosa. Define el Código como Homicidio, quien cause la muerte a otro, tendrá una sanción y esta sanción es superior a los diez años de prisión.

Ahora bien, el término ha sido definido de muchas formas. El Diccionario Jurídico – Teórico Practico, lo define como: *“Muerte causada a un ser humano por otro”*, (Morales, 2017, pág. 441) más allá de eso, define que para aplicar las sanciones que corresponda hay que ver las siguientes circunstancias:

- a) *“Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano y órganos interesados, algunas de sus consecuencias inmediatas o algunas complicaciones determinadas inevitablemente por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurables, ya por no tenerse al alcance de los recursos necesarios.*
- b) *Que, si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos, después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en esta voz y en el CPP.*
- c) *Cuando el cadáver no se encuentra o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de datos que obren en la causa declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.”* (Morales, 2017, pág. 441)

También de manera sencilla, se nos define el término homicidio, como: *“Delito cometido por aquel que, teniendo intención de matar, diere muerte a alguna persona.”* (Casado, 2009, pág. 433)

La Tentativa del Delito desde el punto de vista de la teoría Objetiva y Subjetiva

La Teoría Objetiva surge como resultado de la aplicación a la tentativa de las ideas liberales dominantes durante la primera mitad del siglo pasado. La ideología liberal atribuye al Estado, concebido como producto del contrato social, en virtud del cual cada individuo por razones de utilidad cede una parte de su libertad, el papel de legítimo depositario y administrador de la suma de libertades concebidas. Al Estado, que posee su propia esfera de poder, le corresponde la función de garantizar la vida en comunidad de los ciudadanos, sin introducirse en el ámbito de libertad individual, que cada uno posee.

Precisamente, constituye la función del Derecho el establecimiento de una frontera segura entre la esfera de poder que posee el Estado, así como la vigilancia de las fronteras que transcurren entre las esferas de poder de los individuos. De aquí se dedujo que la lesión del Derecho puede consistir únicamente en la lesión objetiva de uno de los intereses o derecho subjetivos que pertenecen al individuo y la intervención del Estado a través de la pena sólo podrá justificarse si se ha producido dicha lesión.

Los momentos subjetivos de la acción tienen interés en cuanto que permiten la imputación de esta lesión del Derecho a la culpabilidad personal. El fundamentar la antijuricidad en elementos de carácter subjetivo, supondría para la teoría objetiva una confusión del Derecho, que se ocupa de la esfera externa del individuo, con la Moral, a la cual corresponde a la esfera interna, dando lugar a un reprochable Derecho Penal de la voluntad.

En el delito consumado, se castiga la acción que ha causado el resultado; en la tentativa se castiga la acción causalmente adecuada para producirlo, es decir, la acción peligrosa. Teniendo en cuenta que la peligrosidad para el bien jurídico protegido es lo que fundamenta la punición de la tentativa del delito, sólo serán punibles aquellas acciones que comprenden un peligro para el mismo, es decir, una posibilidad de lesión, y no aquellas que, por el contrario, no sean peligrosas desde el punto de vista objetivo aunque la voluntad del autor de cometer el delito se haya manifestado plenamente. (Trepát, 2008, págs. 5-6)

El fundamento de la punición de la tentativa se encuentra, según las teorías subjetivas, en la voluntad del autor subjetivamente manifestada de cometer un delito. Es decir, en la voluntad del autor contraria al Derecho.

Punible aparece desde esta concepción, la infracción de la norma penal desde el punto de vista del autor, es decir, toda conducta que, según su representación, contravenga un mandato o una

prohibición jurídico - penal.

La fundamentación subjetiva de la tentativa tiene, como se ha expuesto, mucha tradición histórica que la fundamentación objetiva; sin embargo, su base ideológica no es, como en aquéllas, unitarias. (Trepát, 2008, pág. 12)

Problemática en la Aplicación del Delito de Homicidio en Grado de Tentativa en Panamá.

Realizado el panorama anterior, hemos observado cómo se ha podido desprender desde el momento de su conceptualización, un análisis crítico en cuanto a las teorías objetivas y subjetivas, en cuanto a la aplicación de la forma imperfecta de la comisión del Delito de Homicidio.

“Para poder dirimir la controversia planteada es necesario, que podamos diferenciar ambas instituciones (tentativa, desistimiento voluntario) consideradas como formas imperfectas de la realización del delito, por nuestra legislación. La diferencia básica radica en que, en la tentativa, el delito no se completa por acciones ajenas a la voluntad del sujeto activo y en el desistimiento voluntario, las acciones no se producen por la propia voluntad del sujeto activo.

El análisis doctrinal de la institución de la tentativa y el desistimiento voluntario nos lleva a considerar lo planteado por las autoras panameñas Dra. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ y GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN, cuando estiman que hay ciertos requisitos para que se configure el desistimiento voluntario los cuales son: “que el perfeccionamiento o consumación dependa de la voluntad del autor y que los actos de ejecución no integren los elementos propios de un tipo penal determinado.”

Por su parte, para la tentativa, señalan que debe unirse la voluntad de realizar el hecho punible, el comienzo o inicio de ejecución, la idoneidad de los medios y la no consumación de delito.” (Forma Imperfecta de la Realización del Delito, 2015)

La doctrina ha denominado delito frustrado o tentativa acabada, aquella que ocurre cuando “se realizan todos los actos necesarios para la consumación, pero esta no se logra por circunstancias ajenas a la voluntad del agente” (ARENAS, Antonio Vicente. Comentarios al Código Penal Colombiano, parte general, quinta edición, Editorial Temis, Bogotá, 1990, tomo I, p. 81).

Mientras que CARRARA define el delito de lesiones como “cualquier acto que causa al cuerpo de otro un daño o un dolor físico, o una perturbación en la mente; siempre que sea ejecutado

sin ánimo de matar, y sin resultado letal” o “cualquier daño a la persona humana que no destruya su vida ni esté dirigido a destruirla”. (Citado por ARENAS, Antonio Vicente. Comentarios al Código Penal Colombiano, Tomo II, Parte Especial, Editorial Temis, Bogotá 1991, p. 457).

En el caso que nos ocupa, como ha indicado la Fiscalía, esta Sala calificó el delito imputado al señor BERBEY como el de homicidio en grado de tentativa, conforme se aprecia en la resolución del dos (2) de diciembre de 1993, donde indicó:

“... Estos testimonios dejan ver claramente que la acción emprendida por el imputado tenía el firme propósito de causar daño a la integridad física, de la Juez Pereira, con grave peligro para su vida, resultado efectivamente obtenido ya que el informe rendido por el médico forense da cuenta de que la ofendida ‘presenta orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, que presenta ahusamiento y que mide 0.6 cms. de diámetro a nivel del 8° espacio intercostal derecho’, como también se consigna que ‘si puso en peligro la vida’ de la víctima (f. 11). A la luz de estas comprobaciones, la Sala comparte la calificación que hace el a-quo cuando enmarca la conducta del imputado Berbey en el tipo penal de homicidio, en grado de tentativa”.

No obstante, la recurrente sostiene que al tenor de lo dispuesto en la Ley 53, aun existiendo una calificación previa de tentativa de homicidio, la competencia para conocer de la misma pertenece a la esfera policiva, toda vez que ésta -el artículo 175 del Código Judicial- es la disposición más favorable al reo. La Sala disiente de la interpretación que de la disposición mencionada formulan las apelantes, por las razones que pasamos a expresar.

El artículo 11 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, que modificó el artículo 175 del Código Judicial es del tenor siguiente:

*“Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos,
... y de los procesos por delitos dolosos o culposos contra la vida y la integridad personal, con resultado de lesiones, cuando la incapacidad no exceda de 30 días.” (Lo resaltado es nuestro).*

El delito de lesiones, contemplado en los artículos 135 a 139 de nuestro Código Penal, se encuentra ubicado bajo el Título I “*De los Delitos contra la Vida y la Integridad Personal*”, y como bien expresa la doctrina, tiene como característica la de provocar un daño físico a otra persona, pero sin la intención de suprimir la vida.

Nuestra legislación positiva recoge ese criterio y es así que el capítulo II del expresado Título, que regula el delito de lesiones personales, señala en su primer artículo, el 135, que quien “*sin intención de matar cause a otro un daño corporal ...*”.

De aquí se desprende que el factor que determina la diferencia entre un delito de lesiones y un delito de tentativa de homicidio es la intención con la cual el actor comete el hecho punible; y dicha intencionalidad puede determinarse -con las obvias limitaciones inherentes al conocimiento de la mente humana- a partir de las circunstancias que rodean al hecho, el arma utilizada, la forma en que se utilizó el arma, el lugar y cantidad de los disparos, etc.

Atinado resulta el siguiente fallo de esta Sala proferido el 7 de septiembre de 1994:

“... el delito de lesiones personales implica la intención de dañar o maltratar la integridad física o psíquica de una persona, mientras que el homicidio tiene por finalidad suprimir la vida de alguien. La distinción entre uno y otro delito plantea problemas cuando, tras poner la vida de otra persona en peligro como consecuencia de heridas causadas con arma idónea, no se produce la muerte al ofendido, por lo que la comprobación de la intención queda a merced del análisis de las circunstancias que rodearon el hecho”.

En otra ocasión, esta Corporación se pronunció sobre el tema sub júdice en fallo de 2 de agosto de 1994, en los siguientes términos:

“Del análisis de estos testimonios resulta entonces evidente el ánimo homicida del imputado, el agotamiento de los medios ejecutivos propios para la realización del propósito delictivo, lo que se confirma con el hecho de que el primer disparo que realizara el imputado no fue al aire sino en dirección a la cabeza de la víctima. El imputado no intentó siquiera amedrentar a la víctima; es inescapable la conclusión de que debió prever como resultado probable de su acción incluso la muerte de Madrigales Ríos.”

La pretensión de las recurrentes de que se declare que el Segundo Tribunal Superior de Justicia no tiene competencia para conocer del delito que se le imputa a BERBEY carece de sentido, si tomamos en cuenta que en todas las legislaciones penales el bien jurídico protegido por excelencia es la vida y todo intento -aún fallido- por extinguirlo se considera una grave violación del ordenamiento jurídico vigente. Por ello, la competencia en estos delitos se asigna siempre a tribunales de mayor jerarquía, como lo son los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y siendo ello así, resulta inaceptable pensar que un delito de esta naturaleza – tentativa de homicidio-

quede reducido al conocimiento de la justicia administrativa. (Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento , 1998)

La interrogante en la materia sería, cuál es el mayor problema de la aplicación del Delito de Homicidio en Grado de Tentativa, es la caracterización de algunos elementos, como la acción de cometer el acto, la forma imperfecta de su realización, es decir no hay consumación del delito y la intención grave de cometer el acto, que muy bien puede ser interpretado como un Delito de Lesiones Personales Dolosas, hay que buscar los elementos fácticos objetivos y subjetivos para adentrarnos si dentro de la causa es un delito de homicidio en grado de tentativa o unas lesiones personales dolosas, como hemos expuesto en el fallo anterior.

Por ejemplo, si dentro de una riña una persona sale con una cortada que puso en peligro su vida, pero esa riña se generó en el momento, es decir, en el acto no hubo acto de preparación, solo de ejecución podríamos encontrarnos ante un Delito de Lesiones Personales Dolosas, así haya puesto en peligro la vida de la víctima; sin embargo, si esta riña se generó producto de eventos anteriores, es decir, discusiones, amenazas, o cualquier otra situación, podríamos de alguna manera u otra estar ante el delito en grado de tentativa de Homicidio, ya que la acción se corta, al no poder materializar el ilícito.

Esta ha sido la gran dificultad en la aplicación de los Delitos de Homicidios en Grado de Tentativa, que tienden a ser parecidos, pero no igual a las Lesiones Personales Dolosas, que están contempladas en el artículo 136 y con sus agravantes en el 137 del Código Penal.

Finalmente, en materia de tentativa, la regulación es muy parecida, pero cambia la forma de sancionarla, puesto que antes la pena no podía ser menor de 1/3 del mínimo ni mayor de 2/3 del máximo y ahora, conforme al artículo 82, será sancionada con pena no menor de la mitad (1/2) del mínimo y no mayor de 2/3 del máximo, lo que indica que la pena mínima ha aumentado. (Nación, 2016, pág. 42)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Casado, M. L. (2009). Diccionario Jurídico. -6a ed. Argentina, Buenos Aires, Argentina: Valletta Ediciones S.R.L.
- Forma Imperfecta de la Realización del Delito (Corte Suprema de Justicia - Sala Segundo de lo Penal 22 de octubre de 2015).
- Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento , 199801 (Corte Suprema de Justicia -

Sala de lo Penal 08 de enero de 1998).

- Morales, R. M. (2017). Diccionario Jurídico - Teórico Práctico. México: IURE Editores, S.A.
- Nación, P. G. (2016). Texto Único del Código Penal de la República de Panamá (Comentado). Panamá: Impresiones Carpal.
- Pujol, J. A. (2015). Código Penal y Procesal Penal. Panamá: JURIDICA PUJOL, S.A.
- Torres, G. E. (2020). Tentativa del Delito y Delito Continuado. España: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Torres, G. P. (2019). El desistimiento en la tentaitva y el delito imposible. España: J.M. BOSCH EDITOR.
- Trepas, E. F. (2008). La Tentativa del Delito: Doctrinas y Jurisprudencia. España: J.M. BOSCH EDITOR.

Leyes y documentos legales

- Código Orgánico Integral Ecuatoriano.
- Constitución de la República de Panamá.
- Convención Americana sobre Derechos Humano.

ANÁLISIS SOCIO JURÍDICO CONCEPTUAL DE LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, VISTA DESDE EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EP



Julián Camilo Forero Agudelo
Universidad Católica de Colombia
<https://orcid.org/0000-0001-9261-4920>
jcforero49@ucatolica.edu.co

DOI: 10.37594/cathedra.n16.550

Fecha de recepción: 08/09/2021

Fecha de revisión: 24/09/2021

Fecha de aceptación: 21/10/2021

RESUMEN

El presente artículo tiene la finalidad de Identificar el paradigma de interpretación conceptual socio jurídica de la reparación de víctimas del conflicto armado, vista desde el acuerdo de paz con las FARC EP, para ello el lector encontrara tres momentos, en primer lugar sobre los paradigmas de interpretación conceptual socio jurídica de la reparación de víctimas del conflicto armado a la luz del acuerdo de paz con las FARC EP, seguidamente los procesos de creación de un paradigma y por último se formulara un paradigma de interpretación, donde se pretende generar una nueva dinámica conceptual, a lo anterior se aplicara el método cualitativo, con enfoque conceptual, de forma inductivo (Cerdeña Gutierrez, págs. 45-60)

Palabras clave: Víctimas, Conflicto armado, Paradigma, Política Pública

* Capítulo que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Desafíos Contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto: Fase II” que forma parte de la línea de investigación: Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado como Tipo A1 por MINCIENCIAS y registrado con el código COL 0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 1 Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Arauca; Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar; Conciliador en derecho; cursando especialización en Gobierno Gestión y Desarrollo, y estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente Coinvestigador en el grupo “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, registrado con el código COL 0120899 en MINCIENCIAS, vinculado al Centro de Investigaciones Socio-jurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia (Bogotá). Asesor del congreso de la Republica de Colombia.

SOCIO-LEGAL-CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE REPARATION OF VICTIMS OF THE ARMED CONFLICT, SEEN FROM THE PEACE AGREEMENT WITH THE FARC EP

ABSTRACT

This article has the purpose of identifying the paradigm of conceptual socio-legal interpretation of the reparation of victims of armed conflict, seen from the peace agreement with the FARC EP, for this the reader will find three moments, first of all, on the paradigms of socio-legal conceptual interpretation of the reparation of victims of the armed conflict in the light of the peace agreement with the FARC EP, then the processes of creating a paradigm and finally a paradigm of interpretation will be formulated, where it is intended to generate a new conceptual dynamic, the qualitative method will be applied to the above, with a conceptual approach, inductively (Cerdeña Gutierrez, págs. 45-60)

Keywords: Victims, Armed Conflict, Paradigm, Public Policy

Metodología: metodología utilizada en el presente artículo es documental, con un enfoque hermenéutico, realizando un análisis sistemático de la información, especialmente legislación, doctrina y jurisprudencia, en la cual se ofrece al lector ser una herramienta de estudio.

I. PARADIGMAS DE INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL SOCIO JURÍDICA DE LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

El presente capítulo pretende describir los diferentes paradigmas de interpretación conceptual socio jurídica de la reparación de víctimas del conflicto armado a la luz del acuerdo de paz con las FARC EP, para cumplir lo anterior es necesario tener claridad que un paradigma surge a raíz de una comunicación objetiva en una colectividad, a lo que su reiteración se transforma en una verdad y a su vez en paradigma (Kunh, págs. 4-50), ahora

Bien, es menester hacer un recorrido por lo expuesto en el acuerdo de paz y el norma grama Nacional e internacional, los cuales han servido de forma general para la interpretación del concepto de reparación.

En igual sentido, es preciso hacer una claridad, en el Estado Colombiano, se han dado momentos de acuerdos de paz, sobre los cuales se han intentado generar espacios para la búsqueda de la paz y con esto la reparación de las víctimas, en ese orden de ideas los antecedentes de la legislación se encuentran en las Leyes 387 de 1997, 782 de 2002, así como en la misma Ley 975 de

2005 llamada Ley de Justicia y Paz, en las cuales se da una concepción de víctima y se establecen unas disposiciones para su atención (República de Colombia, 2020).

La Ley 1448 de 2011 con el nombre de Ley de Víctimas y Restitución de tierras, fue aprobada por el presidente Santos y en el artículo 3º se ubica la definición de víctima: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de Enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno

Con lo anterior enunciado se observará lo contemplado en el devenir normativo, previo al acuerdo de paz con las FARC EP, ahora bien, en lo referente al tema de reparación, donde observa, en el punto 5 del acuerdo de PAZ, frente a el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto y busca generar el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

El gobierno Nacional junto con la mesa de conversaciones de la Habana lo concibe de tal manera:

En tal sentido en la Mesa de Conversaciones de La Habana, hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la Agenda “*Víctimas*” que incluye los subpuntos: 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando la integralidad que debe caracterizar el desarrollo de los numerales comprendidos en el punto Víctimas, iniciamos nuestro análisis del punto asumiendo la “*Declaración de principios*” del 7 de junio de 2014. Estos principios fueron tenidos en cuenta a lo largo de todo el trabajo para el desarrollo del Punto 5 – Víctimas, y deberán irradiar su implementación: • El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos. • El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este

punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. • Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. • La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos. • El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. • La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. • Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. • La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la Agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo. • Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia. • Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el Punto 5 “*Víctimas*” deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán

en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.

A lo expuesto y conforme a la idea inicial del presente capítulo respecto a un paradigma, se puede evidenciar, que dicha creación del modelo de reparación es abstracta puesto que no está expresamente concebida en el acuerdo de paz, a lo que posteriormente se generó la ley 1922 y la ley 1957 en su artículo 7. Donde refiere la reparación integral de las víctimas. Y enuncia que: Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “*Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera*” del 24 de Noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (República de Colombia, 2019).

Sin embargo, ello no es lo suficientemente claro como para saber la ruta y las medidas a efectuar dicha reparación a nivel Nacional, por cuanto es necesario remitirse a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) donde determina los momentos de la reparación integral de una víctima:

En primer lugar, **La restitución**, como primera medida planteada respecto a las víctimas va en procura de restablecer el orden que existía previo el acto que generó la vulneración, dicha restitución según el caso concreto, comprende el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes, entendiéndose esta medida en palabras de Juana Acosta López y Diana Bravo Rubio (2008)

Las encaminadas primeramente a regresar a la persona a la cual le fueron menoscabados sus derechos a la situación en la cual se encontraba antes de la violación siempre y cuando esto sea posible, o para reducir los efectos de la violación.

Las indemnizaciones, pretenden el desagravio de las víctimas compensando económicamente de los perjuicios materiales y en su gran mayoría también de los denominados perjuicios inmateriales.

La rehabilitación busca facilitar la integración de las víctimas y sus familiares nuevamente

a la sociedad a través de la atención médica y psicológica de forma gratuita y efectiva, así como en algunos casos incluye la prestación de servicios jurídicos y sociales a las personas agraviadas

Medidas de satisfacción la cual proporciona la reparación de aquel que no puede ser cuantificado y en los que no resulta suficiente la fijación de una sanción pecuniaria, conforme Vera Piñeros (2008) este tipo de medidas se refiere esencialmente a:

A la restauración moral individual de las víctimas y puede verse como un conjunto de actitudes favorables directas por parte de los perpetradores, el Estado y sus funcionarios, especialmente los de “*alta política*”, por su nivel de representatividad y el considerable impacto de sus aserciones en la opinión pública.

A continuación, mencionaremos algunas de las medidas de satisfacción a las que tienen derecho las víctimas conforme el principio No. 22 de la mentada resolución:

- La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida que esa medida no traiga más perjuicios a la víctima y a sus familiares.
- La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima;
- una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
- la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones
- el fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
- la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

Garantías de no repetición (2008) la expresión “*no repetición*” orientado al concepto restaurativo e individual abarca compromiso personal de los infractores de las normas de derechos humanos, para no continuar con las acciones injustas e ilícitas, y en su aspecto político-moral público, hace referencia al compromiso o social del Estado para la “*depuración*” de sus estructuras y funcionarios, así como al rechazo social de lo ocurrido.

Esos son los diversos conceptos de los que se debe optar para el momento de hacer un concepto de reparación a lo que la más apropiada para el caso es conforme a lo referido en la ONU.

II. LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE UN PARADIGMA FRENTE A LOS ACTUALES DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO

El presente capítulo tiene como finalidad analizar los procesos de creación de un paradigma frente a los actuales de reparación de víctimas de conflicto armado, estas transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Sin embargo, no es el patrón característico del periodo anterior a lo que para el caso debemos observar los periodos por los cuales se han realizados los intentos de acuerdos de paz y a su vez la implementación del modelo de reparación de víctimas (Kuhn, 1962).

Ahora bien, la creación de un paradigma tiene otras consecuencias. Cuando un científico individual puede dar por sentado un paradigma, no necesita ya, en sus trabajos principales, tratar de reconstruir completamente su campo, desde sus principios, y justificar el uso de cada concepto presentado. Esto puede quedar a cargo del escritor de libros de texto. Sin embargo, con un libro de texto, el investigador creador puede iniciar su investigación donde la abandona el libro y así concentrarse exclusivamente en los aspectos más sutiles y esotéricos de los fenómenos naturales que interesan a su grupo. Y al hacerlo así, sus comunicados de investigación comenzarán a cambiar en formas cuya evolución ha sido muy poco estudiada, pero cuyos productos finales modernos son evidentes para todos y abrumadores para muchos (1962)

Lo que para el caso resultaría muy arriesgado generar un nuevo paradigma del esquema o molde que se intentó para la reparación de las víctimas en Colombia, sin embargo, atendiendo a ello y al objeto del documento se pretende crear un nuevo paradigma sobre la temática de la referencia.

III. PARADIGMA DE INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL SOCIO JURÍDICO DE LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DESDE EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EP

Este capítulo tiene como pretende formular un posible paradigma de interpretación conceptual socio jurídico de la reparación de víctimas desde el acuerdo de paz con las FARC EP entiendo que se ha generado la incógnita de ¿Cuál es el paradigma de interpretación conceptual socio jurídica de la reparación de víctimas del conflicto armado?

Lo anterior en el entendido que el acuerdo de paz con las FARC EP no es en su totalidad claros frente a las medidas de reparación a lo que ha sido necesario remitirse a la doctrina como para el caso de María Teresa Uribe De Hincapié, entre otros, y la resolución N° 60 de la ONU del 2005, así como el normo grama que se ha generado desde las diversas interpretaciones a lo que se hace necesario crear unificación del criterio de interpretación para efectuar la reparación para las

víctimas.

En este orden de ideas, se encuentra necesario realizar de manera eficiente, práctica y concreta una pedagogía no solo a funcionarios sino a la población en general a efectos de unificar el criterio de reparación de víctimas en concordancia con la constitución y la ley, para ello es menester generar una política pública para el establecimiento de una medida de reparación de las víctimas.

Así las cosas, se encuentra necesario decantar el concepto de políticas públicas. Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos conceptos que en nuestro idioma no tienen traducción: *Politics* (política), *policies* (políticas). El primero es entendido como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. (Aguilar Astorga y Lima Facio, pág. 2), por tanto, las políticas públicas son realizadas por el Estado en pro de mejorar las condiciones sociales. En igual sentido las políticas públicas deben permitir y dirigirse hacia la generación de las condiciones reales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. (Alcaldía Bogotá, s.f., pág. 2).

Expuesto lo anterior el modelo de reparación debe entenderse como aquella medida por medio de la cual el estado colombiano garantiza la protección y reparación de los bienes jurídicos de los colombianos o no víctimas del conflicto armado, donde se haga respetar la vida, honra, y proyección integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado, dado así que la reparación se no se vea solo tras una figura económica sino de recuperación del tejido social, de manera armónica con las normas internacionales y sin trasgresiones de los tratados o convenciones de las cuales somos partes, evitando así condenas sobre el estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o retaliaciones por el Sistema Interamericano de derechos Humanos, o responsabilidad individual por la Corte Penal Internacional.

Puesto que como punto de partida de este modelo es la Constitución Política de Colombia, si bien es cierto, la constitución 1991 en su Artículo 90. Menciona El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste, (1991) es así que el Estado es quien debe garantizar los mecanismos adecuados para la protección de las personas que habitan dentro del mismo.

Una vez identificado el sujeto por quien debe generar su protección también su reparación por cuanto, el modelo de reparación integral siempre ira en cabeza del Estado, pero sus componentes no pueden desconocer el sistema internacional es necesario que exista un abanico de componendas sobre la misma, sin embargo se debe generar una ruta de acceso al ciudadano a la que se le llamara política pública, donde se recoja y se determine el sentido de la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Ahora bien, el modelo de la reparación integral identificado por el autor oscila desde el punto de partida constitucional citado hasta la normativa que el congreso ha generado a través de la ley 1922 y 1957, junto con la resolución de la 060 y 64 de 2005 ONU, máxime cuando existe una medida básica de reparación, a la que se estima de la siguiente forma:

Restitución	<ul style="list-style-type: none"> • Restablecimiento de libertad, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía • El regreso a su lugar de residencia • Devolucion de bienes materiales, inmuebles
Indemnización	<ul style="list-style-type: none"> • Perjuicios Materiales • Perjuicios Inmateriales, sociales
Rehabilitación	<ul style="list-style-type: none"> • Atención medica y psicológica • Asesorías sociales y jurídicas • Charlas de recuperacion del tejido social. (aceptación de los hechos sin revictimización)
Medidas de Satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción Moral. • Satisfacción Judicial (revision de procedimtos). • Satisfacción en memoria o desagravio de las víctimas. • Creación de centros de apoyo social de víctimas.
Garantías de No repetición	<ul style="list-style-type: none"> • Hace referencia a las medidas encaminadas a garantizar la restructuración y depuración de las estructuras estatales con el objeto de garantizar la observancia y respeto permanente a las normas de DDHH y DIH.
Resocialización	Medidas de búsqueda educación y vocación apoyo de libre inversión para las víctimas del conflicto.

Estructura generada por el autor del documento, apoyada de los antecedentes de reparación de víctimas.

Así las cosas, el anterior es el modelo que se pretende generar para la medida de reparación de las víctimas del conflicto armado, visto desde el acuerdo de paz con las FARC EP, si bien es cierto todo modelo tiene falencias, sin embargo el paradigma expuesto pretende que se genere un reparación de manera integral y para ello debe generarse a través de la implementación de una política pública que atañe a toda la colectividad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta López, J. I., & Bravo Rubio, D. (2008). El cumplimiento de los fines de reparación integral de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de. *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 323-362. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82420293010>>
- Aguilar Astorga y Lima Facio. (Septiembre de 2009). ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas? Obtenido de en Contribuciones a las Ciencias Sociales: www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm
- Alcaldía Bogotá. (s.f.). Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARC_HIVO&p_NORMFIL_ID=1812&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME.
- Cerda Gutierrez, H. (1993). *Elementos de las Investigacion*. Bogotá, D.C.: E.D. El Buho.
- Kunh, T. S. (1962). *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. México: Fondo de Cultura Económica. Obtenido de <https://materiainvestigacion.files.wordpress.com/2016/05/kuhn1971.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas . (16 de Diciembre de 2005). Oficina del alto comisionado . Obtenido de Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>
- República de Colombia . (2019). ley 1957 de 2019. Obtenido de Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=94590>
- República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Obtenido de Consulta de la Norma : http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr_002.html#90
- República de Colombia. (03 de 02 de 2020). Consulta de la norma. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6677>
- Vera Piñeros , D. (Jul/Dic de 2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho

internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU*. Papele Político
, 739 - 773. Obtenido de [http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n2/
v13n2a11.pdf](http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n2/v13n2a11.pdf)

NORMAS PARA AUTORES

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citado son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA

1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

3. Artículos teóricos: son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Previo verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

Other cited rules are the following:

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B., and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

1. Articles: they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

2. Essays: It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

3. Theoretical articles: they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

WORK DELIVERY GUIDELINES

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

PRIVACY STATEMENT

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

OPEN ACCESS POLICY

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

IMPORTANT: In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

COPYRIGHT: Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA
254-1141**

**SEDE CHITRÉ
996-4260**

**SEDE SANTIAGO
998-0363**



www.umecit.edu.pa

revistas.umecit.edu.pa

[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)